



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto y de conformidad con lo previsto en la octava fracción, del Apartado A, del artículo sexto de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*; así como, en los artículos octavo y noveno transitorios del *Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia*; artículo 3o., fracción XIII y los Transitorios Primero y Quinto de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 37, fracción II, 49, 50 y 55, fracción V de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*; 88 y 89 del *Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*; y 15, fracciones I y III, y 21, fracciones III y IV del *Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos*, se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

1. El 04 de febrero de 2015, el particular, a través del Sistema INFOMEX, presentó una solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Enlace de la Procuraduría General de la República, requiriendo lo siguiente:

Modalidad preferente de entrega de información: Entrega por Internet en el INFOMEX

"Descripción clara de la solicitud de información: Se solicita copia en versión pública del expediente integrado en contra de Luis Echeverría Álvarez por el caso del 2 de octubre de 1968. asimismo se solicita copia en versión pública del expediente integrado que se relaciona con la matanza del 10 de junio de 1971." (sic)

2. El 04 de marzo de 2015, la Procuraduría General de la República notificó al particular, a través del Sistema INFOMEX, la respuesta a su solicitud, en los siguientes términos:

"[...]"

Con fundamento en los artículos 44 y 45 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, la información solicitada no puede ser proporcionada debido a que es:

Reservada 12 años.

Motivo del daño por divulgar la información:



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

Estimado solicitante,

La información solicitada se encuentra relacionada con una indagatoria, la cual se encuentra estrictamente reservada conforme a lo previsto en el artículo 14, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, sin que sea procedente dar acceso a la documentación requerida, al tratarse de información clasificada.

Ley

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
GUBERNAMENTAL

**Artículo y
fracción**

Artículo 14,
fracción III

Archivo: 0001700055815_075.pdf

[...]" (sic)

Como anexo a la respuesta, el sujeto obligado adjuntó oficio número **SJAI/DGAJ/02555/2015**, de fecha 02 de marzo de 2015, emitido por la Unidad de Enlace, en los siguientes términos:

"[...]"

Con fundamento en lo establecido por los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 4, 28, 41, 42, 44 y 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento; así como el artículo 49, fracción XV del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y en relación a su solicitud de acceso a la información, por la que requirió conocer:

[Se transcribe la solicitud]

Al respecto, se hace de su conocimiento que la petición fue turnada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

No obstante lo anterior, se tiene que dicha unidad administrativa manifestó que la información solicitada se encuentra inmersa en una averiguación previa que se encuentra en trámite, por lo que tiene el carácter de reservada por un periodo de doce años, conforme a lo dispuesto por el artículo 14, fracción III de la Ley Federal de



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales y Vigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (Lineamiento Generales).

En esa consideración, es procedente referir lo dispuesto por el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, en donde se indica que el expediente de averiguación previa se encuentra estrictamente reservado:

"Artículo 16.- El Juez, el Ministerio Público y la Policía estarán acompañados, en las diligencias que practiquen, de sus secretarios, si los tuvieran, o de dos testigos de asistencia, que darán fe de todo lo que en aquéllas pase.

Al expediente de averiguación previa únicamente tendrán acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido o su representante legal. La averiguación previa así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, y los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados.

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, únicamente deberá proporcionarse una versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal, sin que pueda ser menor de tres ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha resolución haya quedado firme.

Si la resolución de no ejercicio de acción penal resulta de la falta de datos que establezcan que se hubiese cometido el delito, el Ministerio Público podrá proporcionar la información de acuerdo a las disposiciones aplicables, siempre y cuando no se ponga en riesgo indagatoria alguna.

En ningún caso se podrá hacer referencia a información confidencial relativa a los datos personales del inculpado, víctima u ofendido, así como testigos, servidores públicos o cualquier persona relacionada o mencionada en la indagatoria.

El Ministerio Público no podrá proporcionar información una vez que se haya ejercitado la acción penal a quien no esté legitimado.

Al servidor público que quebrante la reserva de la información de la averiguación previa o proporcione copia de los documentos que contenga, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal que corresponda.

En el proceso, los tribunales presidirán los actos de prueba y recibirán, por sí mismos, las declaraciones.

En las diligencias podrán emplearse, según el caso y a juicio del funcionario que las practique, la taquigrafía, el dictáfono y cualquier otro medio que tenga por objeto reproducir imágenes o sonidos y el medio empleado se hará constar en el acta respectiva.

[...]"



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

Sumado a lo anterior, la fracción III, del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone lo siguiente:

"Artículo 14. También se considerará como información reservada:

[...]

III.- Las averiguaciones previas;

[...]"

*Así, conforme a lo dispuesto en los artículos 14, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 16 del Código Adjetivo Penal, **se considera información reservada a las averiguaciones previas**, es decir, aquella información que se genera y recopila en la etapa procedimental en la que el Ministerio Público lleva a cabo las diligencias para conocer la verdad histórica de los hechos delictivos, para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a efecto de ejercitar o no la acción penal y, por tanto, la **documentación relacionada con la misma, sin importar su naturaleza o contenido.***

*Por ende, se desprende que toda vez que la información requerida se encuentra inmersa en un expediente de averiguación previa (**relacionada con una indagatoria**), que se encuentra estrictamente reservada conforme a lo previsto en los artículos citados, **no es procedente dar acceso a la documentación requerida**, al tratarse de información clasificada.*

No es óbice mencionar, que esta autoridad se encuentra impedida legalmente para difundir información relacionada con una averiguación previa, acorde el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, que dispone:

"Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:

[...]

XXVII.- Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una averiguación previa o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean confidenciales...

[...]

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones... XVIII... se le impondrá pena de prisión de cuatro a diez años y de mil a dos mil días multa.

[...]"

Bajo este contexto, el servidor público que quebrante la reserva de la información al dar a conocer datos inmersos en averiguaciones previas, a quien no tiene derecho, incumpliría en lo preceptuado en el numeral antes citado, por lo que estaría cometiendo el delito de contra la administración de justicia, razón que refuerza la negativa de entrega de la información.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

Resulta importante señalar que la declaración de reserva invocada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales fue sometida a consideración del Comité de Información de esta Institución, en su Séptima Sesión Ordinaria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29, fracción III y 45 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70, fracción III de su Reglamento, en donde se determinó confirmar la clasificación de reserva de la información solicitada.

Se debe indicar que el Acta del Comité de Información por la que se confirmó la clasificación antes referida, le será enviada a la brevedad, mediante la dirección señalada para oír y recibir todo tipo de notificaciones.

No obstante lo anterior, y en relación al artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, se hace de su conocimiento que si le es posible acreditar la calidad de inculpado, defensor, víctima u ofendido o su representante legal, usted podrá presentarse ante el Agente del Ministerio Público Federal resguardante de la averiguación previa, a efecto de solicitar la información que requiere.

Ahora bien, si usted tiene alguna duda sobre la respuesta otorgada, puede acudir a esta Unidad de Enlace de Acceso a la Información, ubicada en Río Guadiana No. 31, Planta Baja, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Distrito Federal, o llamar al teléfono (55) 5346 0000, extensiones 5716 y 5717, con un horario de atención de 9:00 a 15:00 y 16:30 a 19:30; o bien, escribanos al correo leydetransparencia@pgr.gob.mx, en donde con gusto atenderemos sus dudas y/o comentarios.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para manifestarle mi sincera y distinguida consideración.

[...]"

3. El 06 de marzo de 2015, el particular presentó ante este Instituto recurso de revisión en contra de la respuesta de la Procuraduría General de la República, en los términos siguientes:

"Acto que se recurre y puntos petitorios: Se recurre la respuesta dada por la PGR. Se solicita al IFAI que analice el presente recurso, toda vez que el caso en cuestión fue considerado como un delito de lesa humanidad por el que fuera titular de la extinta Femosp, Ignacio Carrillo Prieto, y por considerar que se trata de un tema de interés nacional en el que diversos grupos sociales han exigido el esclarecimiento de lo sucedido en 1968, de manera concreta en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y la actuación del ex presidente y en ese entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez. El caso, inclusive ha sido puesto a consideración de organismos internacionales de derechos humanos. por las razones antes expuestas, y quedando a disposición de los comisionados del Instituto que así lo soliciten, agradezco la



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

atención que se de al presente recurso, por si fuera necesario presentar algún alegato o documento más. Gracias.” (sic)

4. El 06 de marzo de 2015, la Comisionada Presidente asignó el número de expediente **RDA 1021/15** al recurso de revisión, y se turnó a la **Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora**, para efectos del artículo 55, fracción I de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

5. El 06 de marzo de 2015, la Secretaria de Acuerdos y Ponencia de la Oficina de la Comisionada Ponente acordó la admisión del recurso de revisión interpuesto por el recurrente en contra de la respuesta otorgada por la Procuraduría General de la República, de conformidad con lo establecido en los artículos 88 y 89 del *Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental* y en el primero, fracción VIII del *Acuerdo del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos*, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 29 de agosto de 2014.

6. El 06 de marzo de 2015, se notificó a la Procuraduría General de la República, a través de la *Herramienta de Comunicación*, la admisión del recurso de revisión interpuesto, otorgándole un plazo de siete días hábiles a partir de dicha notificación para que formulara alegatos, dando cumplimiento al artículo 88 del *Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

7. El 06 de enero de 2015, mediante correo electrónico, se notificó al particular la admisión del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 86, fracción III del *Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental* y, con fundamento en el artículo 55, fracción III de dicha Ley, se le informó sobre su derecho para que manifestara lo que a su interés conviniera.

8. El 18 de marzo de 2015, se recibió en este Instituto, mediante la Herramienta de Comunicación, oficio número **SJAI/DGAJ/03227/2015**, de fecha 17 de marzo de 2015, signado por el Director General de Asuntos Jurídicos y dirigido a la Comisionada Ponente, mediante el cual se expresaron los siguientes alegatos:

[...]

ALEGATOS



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

PRIMERO. La presente solicitud se turnó para su atención a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, misma que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como con el primero, fracción V, numeral 6 del Acuerdo 4/238/12 por el que se adscriben las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República, es la unidad administrativa competente para conocer del caso que hoy nos ocupa.

Siendo así, se debe apuntar que si bien la Oficialía Mayor, cuenta con el auxilio de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, encargada de los sistemas de archivo de esta dependencia, lo cierto es que en precedentes anteriores (como el RDA 5149/14 y en el cumplimiento al RDA 1723/14 y su acumulado), ese Instituto ya ha conocido (en reiteradas ocasiones) que dicha unidad administrativa **no posee** la información que hoy es de interés del particular.

Sumado a lo anterior, en el caso concreto se debe considerar que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, manifestó en la respuesta inicial, que la información solicitada se encuentra inmersa en una averiguación previa que se encuentra en trámite, siendo que ésta tiene el carácter de reservada, acorde a lo dispuesto en el artículo 14, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

SEGUNDO. Los expedientes integrados por los sucesos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, se identificaron con los números de expediente PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002, siendo que éstos fueron consignados por la entonces Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) al Poder Judicial de la Federación, sin que se conservara copia de los expedientes PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002, en esta dependencia.

No obstante lo anterior, y derivado del cumplimiento a la resolución del RDA 5149/14, esta dependencia advirtió que en averiguaciones previas diversas a las identificadas con los números PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002, se contenía información relativa a las indagatorias relacionadas con los sucesos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, siendo que dichas averiguaciones previas **se encuentran en trámite y son consideradas como información reservada**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

De este modo, en el caso concreto se tiene que la única expresión documental que podría dar respuesta al particular, se localiza inmersa en averiguaciones previas diversas a las PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002, que se encuentran **reservadas** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

TERCERO. En la resolución del expediente RDA 5149/14, votado en sesión del 27 de enero de 2015, el Pleno del IFAI esgrimió:

1. Que en virtud de que en boletines de prensa (de los años 2005 y 2006) se había aludido a las averiguaciones previas PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002, se reforzaba el hecho de que este sujeto obligado contaba con la información que era de interés de la entonces recurrente;
2. Que en los cumplimientos a las resoluciones de los expedientes 1311/10 y 1005/04, esta Procuraduría General de la República ya había puesto a disposición las averiguaciones previas PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002, y
3. Que este sujeto obligado estaba constreñido a levantar un duplicado de sus actuaciones, incluyendo aquellas realizadas durante la averiguación previa y conservarlas en sus archivos.

Al respecto, se debe apuntar en primer lugar, que el hecho de que esta dependencia haga referencia a expedientes de averiguación previa (consignados) o a indagatorias diversas, mediante sus boletines o comunicados de prensa, no refleja, de manera imperativa, que esta Procuraduría General de la República contenga en sus archivos a los expedientes que son referenciados.

Asimismo, se debe puntualizar que si bien en los cumplimientos a las resoluciones de los expedientes 1311/10 y 1005/04, esta Procuraduría General de la República puso a disposición las averiguaciones previas PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002, lo cierto es que en dichos supuestos específicos, esta dependencia, y en atención a la determinación del Pleno del IFAI, tomó las medidas pertinentes para obtener una copia de los expedientes que en ese entonces eran solicitados.

No obstante lo anterior, y en razón de que los recurrentes no efectuaron los pagos por las versiones públicas que fueron puestas a su disposición, se tiene que las copias relativas a los expedientes PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002 ya no fueron conservadas en esta dependencia, acorde a lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, toda vez que transcurrió el plazo de los tres meses dispuestos en la norma.

Por otra parte, se debe puntualizar que si bien el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Penales dispone que las actuaciones del Ministerio Público deberán levantarse por duplicado y conservarse en sus respectivos archivos, lo cierto es que al momento de la consignación se proporcionó al Poder Judicial de la Federación, tanto el original como el duplicado de dichas indagatorias, siendo que dicho numeral instruye a que únicamente se conserve copia certificada de las siguientes constancias (Y NO ASÍ DE LOS EXPEDIENTES DE AVERIGUACIÓN PREVIA):



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

- ⇒ De los autos de formal prisión, sujeción a proceso o de libertad por falta de elementos para procesar;
- ⇒ De los autos que den entrada y resuelvan algún incidente;
- ⇒ De las sentencias definitivas, así como
- ⇒ De las que dicte el tribunal de apelación resolviendo definitivamente algún recurso.

Expuesto lo anterior, es posible colegir lo siguiente:

- a. *Que el particular requiere copia de los expedientes relacionados con los sucesos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, siendo éstas las averiguaciones previas: PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002;*
- b. *Que los expedientes PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002, fueron consignados al Poder Judicial de la Federación, sin que se conservará copia de dicha documentación en esta dependencia;*
- c. *Que si bien en los cumplimientos a las resoluciones de los expedientes 1311/10 y 1005/04, esta Procuraduría General de la República puso a disposición las averiguaciones previas PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002, lo cierto es que para dichos supuestos específicos, esta dependencia tomó las medidas pertinentes para obtener una copia de la información que en ese entonces era solicitada (sin que dicha diligencia formará parte de las obligaciones establecidas para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental); sin embargo, pasados los tres meses de la puesta a disposición respectiva, los mismos ya no fueron conservados en los archivos de esta Institución.*

No obstante lo anterior, en el caso concreto se tiene que derivado del cumplimiento a la resolución del RDA 5149/14, esta dependencia advirtió que en averiguaciones previas diversas a las identificadas con los números PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002, se contenía información relativa a las indagatorias relacionadas con los sucesos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, siendo que dichas averiguaciones previas se encuentran en trámite y son consideradas como información reservada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Considerando lo expuesto, es posible advertir que en ningún momento esta dependencia ha actuado en contradicción a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental o su Reglamento, o bien, que haya sido incongruente en su actuar.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

CUARTO. *Acorde al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, el expediente de averiguación previa se encuentra estrictamente reservado y para efectos del ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL (como acontece en el caso que nos ocupa), únicamente deberá proporcionarse una versión pública de la resolución del no ejercicio de la acción penal, tal y como se cita a continuación:*

[Se transcribe el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales]

Del precepto transcrito, se desprende que para efectos del acceso a información pública, no es procedente otorgar acceso al expediente de averiguación previa (ni aún, en versión pública), salvo aquella resolución en la que el Ministerio Público de la Federación haya determinado el NO ejercicio de la acción penal, la cual, únicamente podrá proporcionarse en versión pública.

Con ello, es menester indicar que de conformidad con lo dispuesto en el apartado A, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Procuraduría General de la República es la autoridad con facultades para llevar a cabo las diligencias e investigaciones, así como para allegarse de los elementos necesarios para comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado; lo anterior, a efecto de consignar la acción penal ante los tribunales competentes, de resolver el no ejercicio de la acción penal o, en su caso, la reserva de la averiguación previa por falta de elementos.

En esa consideración, la fracción III, del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el diverso 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, pretende tutelar la capacidad de la autoridad a cargo de sustanciar la averiguación previa; resguardando la información que sirve para llevar a buen término la investigación que se realiza, con el propósito de resolver sobre un hecho posiblemente constitutivo de delito.

De este modo, se concluye que el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales establece un supuesto de reserva específico: pues considera que, salvo la resolución del no ejercicio de la acción penal, TODA INFORMACIÓN que esté relacionada con la averiguación previa tendrá el carácter de reservada. Motivo por el cual no es susceptible de acceso.

De este modo, en el caso concreto se tiene que la única expresión documental que podría dar respuesta a la petición del particular, se localiza inmersa en averiguaciones previas (en trámite) diversas a las PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002, siendo que éstas se encuentran reservadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que no se



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

localiza en el supuesto de excepción previsto en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales (no ejercicio de la acción penal).

Por lo tanto, dar a conocer cualquier información sobre las averiguaciones previas, atenta contra la secrecía y el sigilo que deben resguardar los servidores y empleados que tengan acceso a ella.

Con ello, se debe reiterar que una averiguación previa, se encuentra conformada por todas las constancias que recopila la autoridad para probar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de un inculpado, por lo que se trata de información reservada de conformidad con lo previsto en los artículos 14, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el 16, del Código Federal de Procedimientos Penales, ya que debe mantenerse el sigilo de la indagatoria.

Por otra parte, es menester precisar que de conformidad con los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el derecho de acceso a la información se encuentra garantizado por el Estado y toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública.

No obstante, la propia Constitución determina que existe información que podrá ser reservada temporalmente POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO en los términos que fijan las leyes, tal como es el caso de las averiguaciones previas, según dispone la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su artículo 14, fracción III.

En esa consideración, la reserva de ley establecida tanto en el artículo 14, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, como en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales (en cuanto a las averiguaciones previas), obedece a que dicha información protege asuntos de interés general (indagatorias del orden criminal), cuya difusión afecta a la sociedad en su conjunto. Es decir, que la averiguación previa es en sí misma una razón de interés público, de ahí que la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 14, fracción III le otorgue carácter de información reservada.

En esa consideración, se tiene que no resulta posible otorgar la petición planteada, ya que existe un impedimento legal para proporcionar las documentales que son requeridas, al encontrarse inmersas en averiguaciones previas en trámite.

QUINTO. Respecto al requerimiento de información adicional, formulado por la ponencia de la comisionada ponente, por el que se solicitó lo siguiente:



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

"Asimismo, se solicita a la Procuraduría General de la República para que, en el mismo plazo, respecto de los expedientes de las averiguaciones previas solicitadas por el particular:

- 1. Señale el estado procesal en el que se encuentran.*
- 2. Informe el delito o delitos que se persiguen.*
- 3. En caso de que se haya consignado comunique en qué juzgado se radicó, en qué estado procesal se encuentra y actualmente qué autoridad está conociendo de la causa.*
- 4. Comunique si se han recibido observaciones, recomendaciones y/o comunicaciones de organismos nacionales y/o internacionales de derechos humanos sobre estas averiguaciones previas y, en su caso, realice una descripción de ellas."*

Se debe apuntar que el particular requiere copia de los expedientes relacionados con los sucesos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de Junio de 1971, siendo éstas las averiguaciones previas PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002.

Con ello, se debe precisar que el expediente de averiguación previa con número PGR/FEMOSPP/002/2002, fue consignado (por el delito de genocidio) por la entonces FEMOSPP, el 18 de septiembre de 2005 al Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, mismo que se radicó bajo la causa penal 78/05.

Que el expediente de averiguación previa con número PGR/FEMOSPP/011/2002, fue consignado (por el delito de genocidio) por la extinta FEMOSPP, el 22 de junio de 2004 al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.

Finalmente, se debe apuntar que en las averiguaciones previas PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002, la Coordinación General de Investigación no ha recibido observaciones, recomendaciones y/o comunicaciones de organismos nacionales y/o internacionales de derechos humanos.

Derivado de lo anterior, se solicita a ese H Pleno tenga a bien a confirmar la respuesta otorgada a la solicitud de información que nos ocupa, ya que esta Institución cumplió en tiempo y forma atendiendo la literalidad de la solicitud de información.

Por lo expuesto y fundado, atentamente solicito a usted C. Comisionada:

PRIMERO.- En atención a las consideraciones señaladas en el presente curso tener por reconocida mi personalidad en el presente escrito de formulación de alegatos, y por hechas las manifestaciones en él contenidas.

SEGUNDO.- En su oportunidad y previo los trámites legales se confirme la respuesta otorgada por esta Institución, en términos de lo dispuesto en el artículo 56, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

[...]"



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

9. El 25 de marzo de 2015, este Instituto notificó un requerimiento de información adicional a la Procuraduría General de la República, a efecto de que ésta señalara lo siguiente:

"[...]"

con respecto a todas las averiguaciones previas que contengan indagatorias relacionadas con Luis Echeverría Álvarez y los hechos ocurridos el 02 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971 –con excepción de las averiguaciones previas identificadas con los números PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002–, lo siguiente:

- 1.- Señale el número de identificación de cada averiguación previa que se encuentre en el supuesto invocado.
- 2.- Informe el delito o los delitos que se persiguen, en cada averiguación previa.
- 3.- Señale el estado procesal en el que se encuentra cada una de las averiguaciones previas.
- 4.- En caso de que se haya consignado, comuníquese en qué juzgado se radicó y el estado procesal en el que se encuentra actualmente.

"[...]"

10. El 06 de abril de 2015, la Procuraduría General de la República dio respuesta al requerimiento de información adicional efectuado por este Instituto, en los siguientes términos:

"[...]"

En relación con el acuerdo del 25 de marzo del presente año, emitido por la Secretaría de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información, adscrita a su Ponencia, por el que se requirió a esta Procuraduría General de la República un informe sobre:

[Se transcribe el requerimiento de información adicional]

Se debe apuntar que después de consultar a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, se indicó, en relación con el requerimiento de información adicional, lo siguiente:

⇒ *Respecto a Luis Echeverría Álvarez, se debe reiterar y precisar que SE CONSIGNARON LAS AVERIGUACIONES PREVIAS PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002.*

⇒ *No obstante lo anterior, con copia simple de las diligencias contenidas en las averiguaciones previas PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002, se dejó abierto un triplicado por cada una de las indagatorias consignadas, toda vez que en los hechos investigados se advirtieron, a juicio del Agente del Ministerio Público de la Federación (consignador), la probable participación de otra u otras personas como*



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

probables responsables, por lo que con base en esos triplicados se dio origen a nuevas indagatorias que se encuentran en integración, hasta reunir los requisitos exigidos por la ley para determinar lo que a derecho corresponda.

- ⇒ *Es de vital importancia resaltar, que en las averiguaciones previas iniciadas con motivo de los triplicados abiertos **NO SE INVESTIGA A LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ.***
- ⇒ *Se debe precisar que en la Coordinación General de Investigación **NO** existe registro de otras averiguaciones previas en contra de Luis Echeverría Álvarez.*

Manifestado lo anterior, a continuación se proporcionan los datos de las averiguaciones previas que se encuentran en trámite, a fin de cumplimentar el requerimiento de información adicional, formulado por la ponencia a su cargo:

Averiguación previa consignada	Triplicado abierto	Delito	Estado procesal actual
PGR/FEMOSPP/002/2002	SEIDF/CGI/262/2007	Genocidio	En trámite
PGR/FEMOSPP/011/2002	SEIDF/CGI/260/2007	Genocidio	En trámite

Por lo expuesto y fundado, atentamente solicito a usted C. Comisionado:

PRIMERO.- *Tener por desahogado el requerimiento de información adicional, formulado por su ponencia.*

SEGUNDO.- *En su oportunidad y previos trámites legales, se confirme la respuesta otorgada por esta Institución, en términos de lo dispuesto en el artículo 56, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.*

[...]

11. Al día de la presente resolución, este Instituto no ha recibido alegatos por parte del recurrente.

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Este Instituto, en términos de los artículos 33 y 37, fracción II de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, así como de los artículos 3, fracción XIII y los Transitorios Primero y Quinto de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, es competente para conocer del recurso de revisión que nos ocupa, toda vez que la solicitud de información **0001700055815** fue presentada ante la Procuraduría General de la República, la cual de conformidad con el artículo 1º de la *Ley Orgánica de la*



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

Procuraduría General de la República, se encuentra ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, y por su naturaleza jurídica es un sujeto obligado en términos del artículo 3, fracción XIV de la *Ley de la materia*.

En cuanto al tiempo, el recurso de revisión se presentó dentro del plazo establecido en el artículo 49 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, de 15 días hábiles. Lo anterior, toda vez que el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud el **04 de marzo de 2015** y el recurso de revisión fue interpuesto el **06 del mismo mes y año**, por lo que transcurrieron únicamente dos días, contados a partir de la fecha de notificación del acto reclamado.

SEGUNDO. El particular presentó una solicitud de acceso a la información, a través del Sistema INFOMEX, mediante la cual solicitó versiones públicas de los expedientes integrados en contra de Luis Echeverría Álvarez por los casos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971.

En su respuesta, la Procuraduría General de la República manifestó que la solicitud fue turnada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, la cual señaló que la información solicitada se encuentra inmersa en una averiguación previa que se encuentra en trámite, por lo que tiene el carácter de reservada por un periodo de doce años, conforme a lo dispuesto por el artículo 14, fracción III de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, en relación con el artículo 16 del *Código Federal de Procedimientos Penales y Vigésimo Sexto de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal*.

Asimismo, el sujeto obligado indicó que la declaración de reserva invocada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales fue sometida a consideración del Comité de Información, en su Séptima Sesión Ordinaria, en donde se determinó confirmar la clasificación de reserva de la información solicitada.

Inconforme, el particular interpuso un recurso de revisión, en contra de la respuesta emitida por la Procuraduría General de la República, en donde señaló que el caso en cuestión fue considerado como un delito de lesa humanidad por el que fuera titular de la extinta FEMOSPP, y que se trata de un tema de interés nacional; por lo que pidió que este Instituto analice la respuesta proporcionada.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

Posteriormente, en vía de alegatos, el sujeto obligado manifestó lo siguiente:

- Que los expedientes integrados por los sucesos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, se identificaron con los números de expediente PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002, siendo que éstos fueron consignados por la entonces Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) al Poder Judicial de la Federación, sin que se conservara copia de los mismos.
- Que en averiguaciones previas diversas a las identificadas con los números PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002, se contiene información relativa a las indagatorias relacionadas con los sucesos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, sin embargo dichas averiguaciones previas se encuentran en trámite y son consideradas como información reservada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fracción III de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.
- Que salvo la resolución del no ejercicio de la acción penal, toda la información que esté relacionada con la averiguación previa tendrá el carácter de reservada.
- Que resulta imposible otorgar la petición planteada, ya que existe un impedimento legal para proporcionar las documentales que son requeridas, al encontrarse inmersas en averiguaciones previas en trámite.

Asimismo, el sujeto obligado en su escrito de alegatos dio respuesta al requerimiento de información adicional formulado por este Instituto en el acuerdo de admisión del recurso de revisión, en donde resaltó lo siguiente:

- El expediente de averiguación previa con número PGR/FEMOSPP/002/2002, fue consignado por el delito de genocidio, por la entonces FEMOSPP, el 18 de septiembre de 2005 al Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, mismo que se radicó bajo la causa penal 78/05.
- Que el expediente de averiguación previa con número PGR/FEMOSPP/011/2002, fue consignado por el delito de genocidio,



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

por la extinta FEMOSPP, el 22 de junio de 2004 al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.

- Que en las averiguaciones previas PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002, la Coordinación General de Investigación no ha recibido observaciones, recomendaciones y/o comunicaciones de organismos nacionales y/o internacionales de derechos humanos.

Posteriormente, este Instituto consideró necesario efectuar un nuevo requerimiento de información adicional a la Procuraduría General de la República, por medio del cual se le solicitó que con respecto a todas las averiguaciones previas que contengan indagatorias relacionadas con Luis Echeverría Álvarez y los hechos ocurridos el 02 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971 —con excepción de las averiguaciones previas identificadas con los números PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002—, respondiera lo siguiente:

- El número de identificación de cada averiguación previa que se encuentre en el supuesto invocado.
- El delito o los delitos que se persiguen, en cada averiguación previa.
- El estado procesal en el que se encuentra cada una de las averiguaciones previas.
- En caso de que se haya consignado, comunique en qué juzgado se radicó y el estado procesal en el que se encuentra actualmente.

Como respuesta al requerimiento de información adicional, el sujeto obligado manifestó lo siguiente:

- Respecto a Luis Echeverría Álvarez, se reitera y precisa que se consignaron las averiguaciones previas PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002.
- Con copia simple de las diligencias contenidas en las averiguaciones previas PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002, se dejó abierto un triplicado por cada una de las indagatorias consignadas, toda vez que en los hechos investigados se advirtieron, a juicio del Agente del Ministerio Público de la Federación (consignador), la probable participación



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

de otra u otras personas como probables responsables, por lo que con base en esos triplicados se dio origen a nuevas indagatorias que se encuentran en integración.

- Que en las averiguaciones previas iniciadas con motivo de los triplicados abiertos no se investiga a Luis Echeverría Álvarez.
- Que los triplicados abiertos son los identificados con los números SEIDF/CGI/262/2007 y SEIDF/CGI/260/2007, ambos por el delito de genocidio y actualmente en trámite, hasta reunir los requisitos exigidos por la ley para determinar lo que a derecho corresponde.
- Que en la Coordinación General de Investigación no existe registro de otras averiguaciones previas en contra de Luis Echeverría Álvarez.

Con base en lo expuesto, este Instituto estudiará la respuesta emitida por la Procuraduría General de la República a la solicitud con número de folio **0001700055815**, en relación con el agravio sostenido por el particular; en términos de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

TERCERO. El agravio formulado por el particular **resulta fundado**, lo que conlleva a **REVOCAR** la respuesta emitida por el sujeto obligado, con base en las siguientes consideraciones:

a) Marco normativo

Primeramente, resulta necesario analizar el marco jurídico aplicable al sujeto obligado y a la materia de la solicitud de mérito.

Al respecto conviene empezar citando lo dispuesto en la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, que en sus artículos 21 y 102 apartado A, dispone lo siguiente:

Al respecto, la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* establece lo siguiente:

"[...]"



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

[...]

Artículo 102.

A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador General de la República, designado por el Titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Para ser Procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.

Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculcados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.

[...]"

De lo anterior, se advierte que corresponde al Ministerio Público Federación la investigación de los delitos federales, asimismo, dicha Institución es presidida por el Procurador General de la República.

Ahora bien, la *Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República* dispone lo siguiente:

"[...]

Artículo 1. Esta ley tiene por objeto organizar la Procuraduría General de la República para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y al Procurador General de la República les confieren la Constitución



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y las demás disposiciones aplicables.

La Procuraduría General de la República, ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, ejercerá sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común. La actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos.

Artículo 2. Al frente de la Procuraduría General de la República estará el Procurador General de la República, quien presidirá al Ministerio Público de la Federación.

Artículo 3. El Procurador General de la República intervendrá por sí o por conducto de agentes del Ministerio Público de la Federación en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 4. Corresponde al Ministerio Público de la Federación:

I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende:

A) En la averiguación previa:

a) Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito, así como ordenar a la policía que investigue la veracidad de los datos aportados mediante informaciones anónimas, en términos de las disposiciones aplicables;

b) Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado en términos de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales, en coordinación con sus auxiliares y otras autoridades de los tres órdenes de gobierno, de conformidad con las disposiciones aplicables, los protocolos de actuación que se establezcan, y los convenios de colaboración e instrumentos que al efecto se celebren;

c) Ejercer la conducción y mando de las policías en la función de la investigación de los delitos, e instruirles respecto de las acciones que deban llevarse a cabo en la averiguación del delito y de sus autores y partícipes, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

[...]

f) Obtener elementos probatorios para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, así como solicitar a particulares su aportación voluntaria y, cuando se requiera de control judicial, solicitar al órgano jurisdiccional la autorización u orden correspondientes para su obtención;



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

g) Tomar conocimiento de las detenciones que en flagrancia o caso urgente se lleven a cabo y que le deban ser notificadas, así como llevar un registro de las mismas y realizar las actualizaciones respectivas;

[...]

j) Realizar el aseguramiento de bienes de conformidad con las disposiciones aplicables;

[...]

n) Solicitar al órgano jurisdiccional las órdenes de cateo, la imposición del arraigo, la prohibición de abandonar una demarcación geográfica u otras medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar el éxito de la investigación y evitar que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia, la protección de personas o bienes jurídicos y el debido cumplimiento de la sentencia que se dicte;

ñ) Practicar las diligencias de cateo en términos de las disposiciones legales aplicables y de acuerdo con el mandamiento judicial correspondiente, para lo que podrá auxiliarse de la policía;

[...]

q) Determinar la incompetencia y remitir el asunto a la autoridad que deba conocerlo así como la acumulación de las averiguaciones previas cuando sea procedente;

r) Determinar el ejercicio de la acción penal o la reserva de la averiguación previa, conforme a las disposiciones aplicables;

s) Determinar el no ejercicio de la acción penal, cuando:

1. Los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito;

2. Una vez agotadas todas las diligencias y los medios de prueba correspondientes, no se acredite el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del indiciado;

3. La acción penal se hubiese extinguido en los términos de las normas aplicables;

4. De las diligencias practicadas se desprenda plenamente la existencia de una causa de exclusión del delito, en los términos que establecen las normas aplicables;

5. Resulte imposible la prueba de la existencia de los hechos constitutivos de delito por obstáculo material insuperable, y

6. En los demás casos que determinen las normas aplicables;

t) Acordar el no ejercicio de la acción penal y notificarlo personalmente al denunciante o querellante y a la víctima u ofendido;

[...]



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

B) Ante los órganos jurisdiccionales:

a) Ejercer la acción penal cuando exista denuncia o querrela, esté acreditado el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad de quien o quienes en él hubieren intervenido, solicitando las órdenes de aprehensión o de comparecencia.

Quando se estime necesario atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, la acción penal se ejercerá ante un Juez de Distrito distinto al del lugar de la comisión del delito;

b) Solicitar las medidas cautelares que procedan, en términos de la legislación aplicable, así como la constitución de garantías para los efectos de la reparación del daño;

c) Poner a disposición de la autoridad judicial a las personas detenidas dentro de los plazos establecidos por la ley;

d) Aportar las pruebas y promover las diligencias conducentes para la debida comprobación de la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, de la responsabilidad penal, de la existencia de los daños y perjuicios, así como para la fijación del monto de su reparación;

e) Solicitar la autorización u orden correspondientes para la obtención de cualquier elemento probatorio cuando para ello sea necesaria la intervención de la autoridad judicial, para acreditar el delito y la responsabilidad del inculpado, de conformidad con lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables;

[...]

h) En general, promover lo conducente al desarrollo de los procesos y realizar las demás atribuciones que le señalen las normas aplicables.

[...]

k) Promover la reserva de identidad y otros datos personales de la víctima u ofendido, cuando sean menores de edad; se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada, y en los demás casos que se considere necesario para su protección, y

[...]

Artículo 8. El Procurador General de la República, así como los servidores públicos en quienes delegue la facultad y los que autorice el reglamento de esta ley, resolverán en definitiva:

[...]

VI. La infiltración de agentes para investigaciones en materia de delincuencia organizada, de conformidad con las disposiciones aplicables, y

[...]



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

Artículo 10. Para el despacho de los asuntos que competen a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público de la Federación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente ordenamiento y demás disposiciones aplicables, el Procurador General de la República se auxiliará de:

I. Subprocuradores;
[...]

V. Titulares de unidades especializadas;

VI. Directores generales;

VII. Delegados;

VIII. Titulares de órganos desconcentrados;

IX. Agregados;

X. Agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial, oficiales ministeriales, visitadores y peritos, y

XI. Directores, subdirectores, subagregados, jefes de departamento, titulares de órganos y unidades técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, y demás servidores públicos que establezca el reglamento de esta ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 11. Para el desarrollo de las funciones de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público de la Federación, se contará con un sistema de especialización y de coordinación regional y desconcentración, sujeto a las bases generales siguientes:

I. Sistema de especialización:

a) La Procuraduría General de la República contará con unidades administrativas especializadas en la investigación y persecución de géneros de delitos, atendiendo a las formas de manifestación de la delincuencia organizada, así como a la naturaleza, complejidad e incidencia de los delitos federales;

b) Las unidades administrativas especializadas actuarán en la circunscripción territorial que mediante acuerdo determine el Procurador, en coordinación con las demás unidades administrativas competentes, y

c) Las unidades administrativas especializadas contarán con la estructura administrativa que establezcan las disposiciones aplicables.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

II. Sistema de coordinación regional y desconcentración:

a) La Procuraduría General de la República actuará con base en un sistema de coordinación regional y desconcentración, por conducto de unidades administrativas que ejercerán sus funciones en las circunscripciones territoriales que establezcan las disposiciones aplicables;

b) Las circunscripciones territoriales serán delimitadas atendiendo a la incidencia delictiva, las circunstancias geográficas, las características de los asentamientos humanos, el nivel poblacional, los fenómenos criminógenos y demás criterios que establezca el reglamento de esta ley;

c) Cada circunscripción territorial contará con las unidades administrativas que resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones, de conformidad con las normas aplicables.

Las unidades administrativas a que se refiere el párrafo anterior se integrarán con agencias del Ministerio Público de la Federación, oficiales ministeriales y el personal necesario para el desempeño de sus funciones;

d) Las delegaciones serán órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República en las entidades federativas. Al frente de cada delegación habrá un delegado, quien ejercerá el mando y autoridad jerárquica sobre el personal que le esté adscrito.

Las delegaciones preverán medidas para la atención de los asuntos a cargo del Ministerio Público de la Federación en las localidades donde no exista agencia permanente;

e) Las unidades administrativas, delegaciones y demás órganos desconcentrados en cada circunscripción territorial atenderán los asuntos en materia de averiguación previa, ejercicio de la acción penal, reserva, incompetencia, acumulación, no ejercicio de la acción penal, control de procesos, amparo, prevención del delito, servicios a la comunidad, servicios administrativos y otros, de conformidad con las facultades que les otorgue el reglamento de esta ley y el acuerdo respectivo del Procurador General de la República;

f) La ubicación y los ámbitos territorial y material de competencia de las unidades administrativas y órganos desconcentrados en las circunscripciones territoriales, así como de las delegaciones, se determinarán por acuerdo del Procurador General de la República, atendiendo a los criterios señalados en el inciso b), y

g) El Procurador General de la República expedirá las normas necesarias para la coordinación y articulación de las unidades administrativas en cada circunscripción territorial con las áreas centrales, los órganos desconcentrados y las unidades especializadas, a efecto de garantizar la unidad de actuación y dependencia jerárquica del Ministerio Público de la Federación."



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

[...]"

El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece lo siguiente:

"[...]

Artículo 3. Para el cumplimiento de los asuntos competencia de la Procuraduría, de su Titular y del Ministerio Público de la Federación, la Institución contará con las unidades administrativas y órganos desconcentrados siguientes:

A) Subprocuradurías:

[...]

IV. Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, y

[...]

Artículo 14. Al frente de cada Subprocuraduría habrá un Subprocurador, quien será nombrado en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica y tendrá las facultades siguientes:

[...]

I. En el ámbito de su competencia, fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, atendiendo a las normas aplicables y políticas institucionales, conforme a los lineamientos que emita el Procurador;

II. Resolver en definitiva el ejercicio de las atribuciones a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica. Tratándose del no ejercicio de la acción penal será previo dictamen del agente del Ministerio Público de la Federación auxiliar del Procurador. La resolución deberá de ser notificada en forma personal al denunciante, víctima u ofendido.

Podrán desahogar las prevenciones que la autoridad judicial acuerde en los términos de la ley, respecto de la omisión de formular conclusiones en el término legal o de conclusiones presentadas en un proceso penal cuya consecuencia sea el sobreseimiento del mismo, o, igualmente, respecto de cualquier incidente procesal que tuviere como resultado la libertad absoluta del inculpado antes de que se pronuncie sentencia; todo lo señalado en este párrafo, con independencia de las atribuciones conferidas a los Delegados.

La facultad contenida en la fracción VI del artículo 8 de la Ley Orgánica corresponderá exclusivamente al Titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada;

III. Participar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes de la Institución, en la formulación de anteproyectos de



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

iniciativas de leyes, tratados internacionales, acuerdos interinstitucionales, decretos, reglamentos, y demás instrumentos normativos que se relacionen con los asuntos materia de su competencia;

IV. Organizar, coordinar, dirigir y evaluar las unidades administrativas que le estén adscritas;

V. Acordar con el Procurador el despacho de los asuntos de su competencia, así como las políticas, estrategias y líneas de acción, para combatir los delitos materia de su competencia;

VI. Emitir o suscribir los instrumentos jurídicos a que se refiere el artículo 7 de la Ley Orgánica;

VII. Emitir, a propuesta de sus unidades administrativas adscritas, las directrices, criterios y protocolos de actuación, en relación con su competencia, y

VIII. Las demás que, en cada caso, les confieran otras disposiciones o el Procurador. [...]

Ahora bien, el *Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República* establece lo siguiente:

**[...]
SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN DELITOS
FEDERALES**

OBJETIVO:

Planear, conducir y evaluar la actuación ministerial especializada en los procesos penales de delitos federales previstos en las Leyes aplicables, Código Penal Federal, Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones; determinar los mecanismos de coordinación entre las Unidades Especializadas, las Unidades Centrales, las desconcentradas nacionales e internacionales de la Procuraduría, así como proponer con base a criterios de especialización normas y procedimientos que apoyen el quehacer sustantivo, que combatan con eficacia las organizaciones criminales y preservar así el Estado de Derecho.

FUNCIONES:

Conducir y evaluar las actividades de las Unidades Especializadas adscritas a la Subprocuraduría de Investigación en Delitos Federales, con el propósito de fijar las medidas correctivas y/o preventivas;

Atender y diseñar estrategias de acción que permitan combatir frontalmente a los delitos contra el ambiente, los derechos de autor, la propiedad industrial, fiscales,



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

financieros, los cometidos por servidores públicos de otras dependencias o entidades, contra la administración de justicia, y los previstos en Leyes Especiales;

Evaluar y controlar la actuación del Ministerio Público Federal Especializado, así como vigilar que su desempeño en todo momento se apegue a la Constitución, Ley de la Propiedad Industrial, Ley del Seguro Social, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Leyes Especiales, Código Penal Federal, Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables;

Dictar las medidas que permitan fortalecer mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades federales, estatales, municipales, así como con la Coordinación General de Delegaciones y la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías, conforme a la normatividad aplicable y las políticas que emita el Procurador, para que la procuración de justicia sea eficaz en todo el territorio nacional;

Emitir, previa autorización del Procurador las normas de carácter general y demás disposiciones técnico jurídicas que apoyen eficazmente el funcionamiento y operación de la Subprocuraduría;

Resolver sobre la formulación de conclusiones no acusatorias y conducir los trabajos de desahogo de las previsiones que la autoridad judicial acuerde en los términos legales correspondientes, asimismo, al respecto de la omisión de formular conclusiones o las que tienen como consecuencia el sobreseimiento, así como de cualquier accidente procesal, que tenga como resultado la libertad absoluta del inculpado, antes de que la autoridad judicial dicte sentencia;

Disponer con apego a las disposiciones aplicables, la notificación a la víctima u ofendido del no ejercicio de la acción penal;

Proponer al Procurador, previo dictamen jurídico que resulte del análisis de la legislación y normatividad en materia de su competencia, anteproyectos de iniciativas de leyes, tratados, decretos, reglamentos y demás instrumentos que apoyen a la función ministerial especializada, de policía y la pericial, para que éstas se simplifiquen, mejoren y sean oportunas;

Representar y defender de manera especializada ante autoridades federales y locales, según el caso, los intereses de la sociedad, Federación e Institución, sin menoscabo de la autoridad correspondiente;

Proponer al Procurador medidas normativas y procedimientos innovadores, que permitan uniformar criterios de acción ministerial de policía y periciales que apliquen en los procesos penales en materia de su competencia así como los amparos que en su caso se promuevan;

Ordenar, previa autorización del Procurador, se proporcione la asesoría jurídica que le sea requerida por las Unidades Administrativas de la Institución y diversas dependencias del Ejecutivo Federal en áreas de su especialidad;



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

[...]

Instruir cuando así proceda, dentro de su ámbito de competencia y de manera conjunta con otras autoridades con facultades afines, la persecución de los delitos federales, ejercer la acción penal ante el órgano jurisdiccional, restituir provisionalmente la libertad e impugnar las resoluciones judiciales;

Dirigir las acciones de vigilancia sobre el cumplimiento de la Constitución, respeto a las garantías individuales y protección de los derechos humanos, en todos los lugares de detención, prisión y reclusión de reos;

Requerir a diversas Unidades Administrativas de la Institución que tengan funciones afines informes sobre averiguaciones previas, actuaciones ministeriales, control de procesos penales y de juicios de amparo en materia de su competencia;

Las demás que le confieran otras disposiciones o el Procurador.

[...]"

En el Acuerdo A/238/12, por el que se adscriben las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría General de la República se establece lo siguiente:

"[...]

Que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República faculta a su Titular para adscribir orgánicamente las unidades administrativas centrales y órganos desconcentrados a las áreas básicas correspondientes, y

Que el 23 de julio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual establece que la Titular de la Institución determinará la organización y funcionamiento de la Procuraduría; las circunscripciones territoriales; la adscripción de las unidades administrativas y órganos desconcentrados; y las atribuciones de las áreas atendiendo a las necesidades del servicio.

Por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto determinar la adscripción de las unidades administrativas y órganos desconcentrados previstos en el artículo 3 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en los términos siguientes:

[...]

V. A la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales:

[...]



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

6. *La Coordinación General de Investigación, y*
[...]

SEGUNDO. *Las Fiscalías o Unidades Especializadas creadas mediante Acuerdo del Titular de la Procuraduría General de la República, conservarán la adscripción prevista en sus respectivos instrumentos de creación.*

TERCERO. *Durante las ausencias de los CC. Subprocuradores Jurídico y de Asuntos Internacionales; de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada; Especializado en Investigación de Delitos Federales; de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; Oficial Mayor, Visitador General, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Titular de la Policía Federal Ministerial, Coordinador General de Servicios Periciales y Coordinador de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, el despacho y resolución de los asuntos estarán a cargo del Titular de la unidad administrativa que se menciona en las fracciones II a XII, del artículo PRIMERO del presente Acuerdo, conforme al orden establecido, salvo lo que por escrito determine el Titular de cada Unidad Administrativa en casos particulares.*
[...]

QUINTO. *Las menciones a las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados que hagan los acuerdos, circulares, manuales, instructivos y demás disposiciones administrativas expedidas con anterioridad al presente instrumento, se entenderán referidas a las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados que en términos del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República hayan absorbido sus facultades.*
[...]"

De las disposiciones citadas se puede concluir lo siguiente:

- Para el despacho de los asuntos del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República cuenta con diversas unidades administrativas y servidores públicos; además, le compete la investigación de los delitos federales, el cual tiene a su cargo la integración de la averiguación previa y la consignación de los responsables ante los tribunales correspondientes.
- Le corresponde al Ministerio Público de la Federación, durante la averiguación previa, recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito; practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado en términos de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales; obtener elementos probatorios para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

indiciado; determinar la incompetencia y remitir el asunto a la autoridad que resulte competente; determinar el ejercicio de la acción penal o la reserva de la averiguación previa y determinar el no ejercicio de la acción penal.

- Para el ejercicio de las atribuciones que le corresponde a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público, el Procurador General de la República se auxilia de subprocuradores y titulares de unidades especializadas. Así, para el desarrollo de sus funciones, cuenta con un sistema de especialización y de coordinación regional, así como de desconcentración, atendiendo a géneros de delitos y circunscripciones territoriales.
- En el sistema de especialización, la Procuraduría General de la República cuenta con unidades administrativas especializadas en la investigación y persecución de géneros de delitos, atendiendo a las formas de manifestación de la delincuencia organizada, así como a la naturaleza, complejidad e incidencia de los delitos federales. Dichas unidades especializadas cuenta con la estructura administrativa que se establezca en las disposiciones aplicables.
- Dentro de las unidades especializadas se encuentra la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, la cual tiene como objetivo planear, conducir y evaluar la actuación ministerial especializada en los procesos penales de delitos federales previstos en las Leyes aplicables, a saber, el Código Penal Federal, el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones; determinar los mecanismos de coordinación entre las Unidades Especializadas, las Unidades Centrales, las desconcentradas nacionales e internacionales de la Procuraduría, así como proponer con base a criterios de especialización normas y procedimientos que apoyen el quehacer sustantivo, que combatan con eficacia las organizaciones criminales y preservar así el Estado de Derecho.
- Le corresponde a la **Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales**, entre otras funciones, las siguientes:
 - a) Conducir y evaluar las actividades de las Unidades Especializadas adscritas a la Subprocuraduría de Investigación en Delitos Federales, con el propósito de fijar las medidas correctivas y/o preventivas;



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

- b) Atender y diseñar estrategias de acción que permitan combatir frontalmente los delitos contra el ambiente, los derechos de autor, la propiedad industrial, fiscales, financieros, los cometidos por servidores públicos de otras dependencias o entidades, contra la administración de justicia y los previstos en Leyes Especiales;
 - c) Resolver sobre la formulación de conclusiones no acusatorias y conducir los trabajos de desahogo de las previsiones que la autoridad judicial acuerde en los términos legales correspondientes, asimismo, al respecto de la omisión de formular conclusiones o las que tienen como consecuencia el sobreseimiento, así como de cualquier incidente procesal, que tenga como resultado la libertad absoluta del inculpado, antes de que la autoridad judicial dicte sentencia;
 - d) Instruir cuando así proceda, dentro de su ámbito de competencia y de manera conjunta con otras autoridades con facultades afines, la persecución de los delitos federales, ejercer la acción penal ante el órgano jurisdiccional, restituir provisionalmente la libertad e impugnar las resoluciones judiciales;
 - e) Dirigir las acciones de vigilancia sobre el cumplimiento de la Constitución, respeto a las garantías individuales y protección de los derechos humanos, en todos los lugares de detención, prisión y reclusión de reos, y
 - f) Requerir a diversas Unidades Administrativas de la Institución que tengan funciones afines informes sobre averiguaciones previas, actuaciones ministeriales, control de procesos penales y de juicios de amparo en materia de su competencia.
- Para el desarrollo de sus funciones, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales cuenta con diversas unidades administrativas, entre las que se encuentra la **Coordinación General de Investigación**.

Es importante recordar que el particular requirió información relacionada con expedientes de averiguaciones previas, en donde, de acuerdo a las constancias que obran en el expediente, se consignaron a personas por el delito de genocidio. Al respecto, resulta pertinente analizar la normatividad aplicable al caso particular.

En primer término, tenemos que el *"Acuerdo por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas*



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado”, emitido por la Presidencia de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2001, dispone lo siguiente:

[...]

Que la protección de los derechos fundamentales y la investigación y persecución de los delitos son funciones reservadas constitucionalmente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Ministerio Público respectivamente;

[...] en ese tenor, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó una investigación especial sobre desaparecidos y como consecuencia emitió una recomendación al Ejecutivo;

[...] con pleno respeto a la autonomía, que constitucionalmente corresponde al Ministerio Público de la Federación en la persecución de los delitos del orden federal, la Procuraduría General de la República contará con un Fiscal Especial, cuya misión será realizar las investigaciones necesarias para la debida integración de las averiguaciones previas que deriven de denuncias o querellas formuladas en razón de sucesos probablemente constitutivos de delitos, así como perseguirlos cuando proceda;

[...] algunas de las fuentes relevantes para el esclarecimiento de los sucesos ya mencionados, se encuentran en los archivos de las extintas direcciones Federal de Seguridad y General de Investigaciones Políticas y Sociales, actualmente resguardados por la Secretaría de Gobernación a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y en los que se conserven de la también extinta División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, también conocida como ‘servicio secreto’, que estuvo adscrita a la entonces Dirección General de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito Federal, así como aquellos que se tengan en la Secretaría de la Defensa Nacional;

[...] la documentación a que se ha hecho referencia y que se encuentre bajo resguardo de las autoridades federales será transferida al Archivo General de la Nación y, al mismo tiempo, se convoca a los gobiernos de las entidades federativas y a los particulares que cuenten con información que pudiere resultar relevante, a que se incorporen a este esfuerzo institucional y aporten la que tuvieren;

ACUERDO:

Capítulo I.

De la investigación y persecución de los posibles delitos Materia del Acuerdo

Artículo 1º. Con pleno respeto a su autonomía constitucional, se solicita al Procurador General de la República que, en el ámbito de sus atribuciones, nombre a un Fiscal Especial, agente del Ministerio Público de la Federación, que se encargue de concentrar y conocer de las investigaciones, de integrar las



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

averiguaciones previas que se inicien con motivo de las denuncias o querellas formuladas por hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos contra personas vinculadas con movimientos sociales o políticos, así como de perseguir los delitos que resulten ante los tribunales competentes y, en general, resolver conforme a derecho proceda.

El Fiscal Especial contará con los recursos humanos, financieros y materiales que sean necesarios para el debido cumplimiento de sus funciones.

Artículo 2º. Se exhorta al Procurador General de la República para que conforme, por invitación, un Comité de Apoyo, cuyo objeto sea aportar al Fiscal Especial a que se refiere el artículo anterior, los elementos históricos, sociales, políticos, jurídicos y demás necesarios que requiera para el debido cumplimiento de sus funciones.

[...]

Derivado de lo anterior, el entonces titular de la Procuraduría General de la República emitió el acuerdo número "A/01/02, por el que se designa al Fiscal Especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado", el cual fue publicado el 4 de enero de 2002, mediante boletín que entró en vigor al día siguiente de su publicación, en el que se establece lo siguiente:

[...]

Considerando que (...) con fecha 2 de octubre de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se confirma en sus términos la autorización para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República accedan a la información contenida en los archivos de las extintas Dirección Federal de Seguridad y Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, actualmente bajo custodia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional;

[...] con fecha 27 de noviembre de 2001, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer un informe sobre 532 casos de personas presuntamente desaparecidas durante los años setenta y principios de los ochenta, en los que presuntamente existieron violaciones a los derechos humanos, con motivo de hechos relacionados con movimientos sociales y políticos, de los cuales corresponde al Ministerio Público de la Federación la investigación y persecución de los probables delitos federales que se hubieren cometido, para determinar las responsabilidades a que hubiere lugar;

[...] mediante Acuerdo del Ejecutivo Federal, por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2001, se dispuso que los archivos, expedientes,



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

documentos e información en general generados por las extintas Dirección Federal de Seguridad y Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, se concentren en el Archivo General de la Nación, con objeto de que puedan ser consultados, entre otros, por el Ministerio Público de la Federación para el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales;

[...] mediante el citado Acuerdo, el Ejecutivo Federal solicitó a la Procuraduría General de la República que, en el ámbito de sus atribuciones, nombre un Fiscal Especial, agente del Ministerio Público de la Federación, a cargo de concentrar y conocer las investigaciones, de integrar las averiguaciones previas que se inicien con motivo de las denuncias o querellas formuladas por hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos contra personas vinculadas con movimientos sociales o políticos del pasado, así como de perseguir los delitos federales que resulten ante los tribunales competentes y, en general, resolver conforme a derecho lo que proceda;

Por lo expuesto, es preciso designar un Fiscal Especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, quien contará con autonomía técnica y operativa en el ejercicio de sus funciones y con los recursos humanos, financieros y materiales disponibles de conformidad con las previsiones presupuestales, a fin de que las investigaciones se realicen con total transparencia, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente Acuerdo.

Primero. Se designa al C. Doctor en Derecho IGNACIO CARRILLO PRIETO como Fiscal Especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, quien contará con autonomía técnica y operativa para el debido cumplimiento de sus funciones.

El Fiscal Especial será Agente del Ministerio Público de la Federación y ejercerá las facultades previstas en los artículos 8º y 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su Reglamento, así como en el Código Federal de Procedimientos Penales y demás normas aplicables, respecto de hechos a que se refiere el párrafo anterior.

Segundo. El Fiscal Especial contará con los recursos humanos, materiales y financieros que se establezcan en el presupuesto de la Procuraduría General de la República.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su suscripción.

Segundo. Las averiguaciones previas y procesos penales por hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado a que se refiere el presente Acuerdo, que actualmente sean del conocimiento de las diversas unidades administrativas de la Institución deberán concentrarse con el Fiscal Especial.

Tercero. Las unidades administrativas de la Procuraduría General de la República que tengan a su cargo el archivo histórico de la Institución deberán realizar una revisión de los expedientes y documentación que se encuentren bajo su resguardo, relacionados con hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, los cuales pondrán a disposición del Fiscal Especial.

[...]

Finalmente, mediante Acuerdo número A/317/06 del titular de la Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2007, se determinó lo siguiente:

[...]

la Fiscalía Especial ha realizado investigaciones históricas y documentales, así como la recopilación de pruebas que han sustentando líneas de investigación, mismas que dieron lugar a la consignación de individuos probablemente responsables de la comisión de delitos relacionados con movimientos sociales y políticos sucedidos en las décadas de los sesenta y setenta;

[...] el Fiscal Especial presentó el informe detallado de las investigaciones encaminadas a descubrir la verdad histórica de los hechos relatados, las consignaciones efectuadas, las resoluciones dictadas por el Poder Judicial de la Federación y las acciones encaminadas al cumplimiento de tales resoluciones;

[...] una vez presentado el informe final, se estima oportuno orientar los esfuerzos de la Procuraduría a la atención de otras demandas ciudadanas que se relacionan con la investigación de actos ilícitos que lesionan de manera particularmente grave a la sociedad, como lo son los delitos cometidos en contra de las mujeres, el ataque a la libertad de expresión de los periodistas, los delitos violentos cometidos en las fronteras, entre otros;

[...] dado el grado de avance en las investigaciones efectuadas por la Fiscalía Especial, se estima pertinente que las averiguaciones previas y procesos penales pendientes pasen al conocimiento de otras unidades administrativas de la Procuraduría, y

[...] lo anterior no significa, de manera alguna, que se cancelen las investigaciones o que se descuiden los procesos penales concernientes al ámbito de la competencia de la Fiscalía Especial, cuyo seguimiento será atendido con idéntica dedicación por otras áreas de la Institución, he tenido a bien expedir el siguiente



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

ACUERDO

Artículo Primero. *Se abroga el Acuerdo A/01/02 por el que se designa Fiscal Especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, suscrito el 4 de enero de 2002.*

Artículo Segundo. *Se deroga el Capítulo Tercero del Acuerdo A/066/03 por el que se delegan diversas facultades a servidores públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de julio de 2003.*

TRANSITORIOS

Primero. *Los procedimientos penales y demás asuntos que se encuentren pendientes a cargo del Fiscal Especial pasarán al conocimiento de la Coordinación General de Investigación.*

[...]

Tercero. *Los recursos materiales y financieros asignados al Fiscal Especial serán reasignados por la Oficialía Mayor de conformidad con las necesidades del servicio, previa autorización del Procurador General de la República.*

Cuarto. *Los derechos laborales del personal asignado al cumplimiento del Acuerdo A/01/02, se respetarán de conformidad con las disposiciones legales aplicables.*

Quinto. *Se derogan las demás disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Acuerdo.*

[...]"

De los citados acuerdos, se desprende lo siguiente:

- El 27 de noviembre de 2001, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer un informe sobre el caso de 532 personas presuntamente desaparecidas durante la década de los setenta y principios de los ochenta, en los que presuntamente existieron violaciones a los derechos humanos, con motivo de hechos relacionados con movimientos sociales y políticos, de los cuales corresponde al Ministerio Público de la Federación la investigación y persecución de los probables delitos federales que se hubieren cometido, para determinar las responsabilidades a que hubiere lugar.
- Derivado de lo anterior, el entonces titular del Ejecutivo Federal emitió un acuerdo mediante el cual solicitó al titular de la Procuraduría General de la



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

República que nombrara un fiscal especial encargado de concentrar y conocer las investigaciones, de integrar las averiguaciones previas que se inicien con motivo de las denuncias o querellas formuladas por hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos contra personas vinculadas con movimientos sociales o políticos del pasado, así como de perseguir los delitos federales que resulten ante los tribunales competentes y, en general, resolver conforme a derecho lo que procediera.

- El 4 de enero de 2002, el entonces titular de la Procuraduría General de la República emitió el Acuerdo número A/01/02, por medio del cual se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y se nombró como titular de la misma al Dr. Ignacio Carrillo Prieto.
- En los artículos transitorios del acuerdo citado, se estableció que las unidades administrativas de la Procuraduría General de la República que tuvieran a su cargo el archivo histórico de la Institución deberían realizar una revisión de los expedientes y documentación que se encontrasen bajo su resguardo, relacionados con hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, los cuales pondrían a disposición del Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
- Mediante Acuerdo número A/317/06, el entonces Procurador General de la República determinó disolver la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, lo anterior, derivado del avance en las investigaciones efectuadas por la citada Fiscalía y estimó pertinente que las averiguaciones previas y procesos penales pendientes pasaren al conocimiento de otras unidades administrativas del sujeto obligado.
- En el citado acuerdo se determinó que los procedimientos penales y demás asuntos que se encontraban pendientes a cargo del Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, pasarían al conocimiento de la Coordinación General de Investigación, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

Por su parte, el propio *Código Penal Federal*, reconoce como un delito contra la humanidad al genocidio, en los siguientes términos:



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

[...]

TITULO TERCERO
Delitos Contra la Humanidad

CAPITULO II
Genocidio

Artículo 149-Bis.- *Comete el delito de genocidio el que con el propósito de destruir, total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetrare por cualquier medio, delitos contra la vida de miembros de aquellos, o impusiere la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo.*

Por tal delito se impondrán de veinte a cuarenta años de prisión y multa de quince mil a veinte mil pesos.

Si con idéntico propósito se llevaran a cabo ataques a la integridad corporal o a la salud de los miembros de dichas comunidades o se trasladaren de ellas a otros grupos menores de diez y seis años, empleando para ello la violencia física o moral, la sanción será de cinco a veinte años de prisión y multa de dos mil a siete mil pesos.

Se aplicarán las mismas sanciones señaladas en el párrafo anterior, a quien con igual propósito someta intencionalmente al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.

En caso de que los responsables de dichos delitos fueran gobernantes, funcionarios o empleados públicos y las cometieren en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de las sanciones establecidas en este artículo se les aplicarán las penas señaladas en el artículo 15 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación.

[...]"

Por otra parte, es de advertir que en términos de lo dispuesto en el artículo 133 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.

En ese orden de ideas, considerando que el 21 de junio de 2005 el Senado de la República aprobó la ratificación del "*Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional*", dicho cuerpo normativo fue incorporado al orden jurídico mexicano como Ley Suprema de la Unión. Dicho Estatuto establece lo siguiente:

"[...]"



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

[...]

PREÁMBULO

[...]

Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales,

[...]

Destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud del presente Estatuto será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales,

Decididos a garantizar que la justicia internacional sea respetada y puesta en práctica en forma duradera,

Han convenido en lo siguiente:

[...]

Artículo 5 - Crímenes de la competencia de la Corte

1. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes:

- a) El crimen de genocidio;*
- b) Los crímenes de lesa humanidad;*

[...]

A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "genocidio" cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

- a) Matanza de miembros del grupo;*
- b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;*
- c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;*
- d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;*
- e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.*

Artículo 7

Crímenes de lesa humanidad

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

- a) Asesinato;
- b) Exterminio;
- c) Esclavitud;
- d) Deportación o traslado forzoso de población;
- e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;
- f) Tortura;
- g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;
- h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;
- i) Desaparición forzada de personas;
- j) El crimen de apartheid;
- k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

[...]"

Como se advierte de la norma transcrita, la Corte Penal Internacional se limita a conocer de los crímenes con mayor trascendencia para la comunidad internacional. En dicho supuesto se encuentran el genocidio y los crímenes de lesa humanidad.

Respecto de la tipificación del genocidio crímenes de lesa humanidad, el Estatuto indica que se trata de la comisión de actos (homicidio, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional) perpetrados como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Respecto de la tipificación del genocidio, el Estatuto indica que se trata de la comisión de actos (matanza de miembros del grupo; lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo y traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.) perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

En este tenor, es importante recordar que el particular solicitó la versión pública de los expedientes en contra de Luis Echeverría Álvarez por los casos ocurridos el 2



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971 y posteriormente, mediante su recurso, manifestó su inconformidad aludiendo que se trata de delitos de lesa humanidad.

Una vez establecido el marco jurídico correspondiente al sujeto obligado y a la materia del presente asunto, resulta pertinente empezar con el análisis de la respuesta brindada por el sujeto obligado.

b) Análisis de la respuesta.

La Procuraduría General de la República turnó la solicitud a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, la cual manifestó que la información solicitada por el particular se encuentra inmersa en una averiguación previa en trámite por lo que se trata de información reservada, con fundamento en el artículo 14, fracción III de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

Asimismo, el sujeto obligado manifestó que la declaración de reserva invocada por la unidad administrativa que conoció del asunto, fue sometida a consideración del Comité de Información de la Procuraduría General de la República, el cual confirmó la clasificación.

De igual manera, se informó que el acta del Comité de Información, por medio de la cual se confirmó la reserva de la información solicitada, sería enviada al particular; sin embargo en el expediente no obra ninguna constancia que permita presumir que el sujeto obligado entregó dicha acta.

Ahora bien, tras una búsqueda de información pública este Instituto encontró que en una solicitud diversa con número de folio **0001700277814**, que la Procuraduría General de la República declaró la inexistencia de la misma información que en el presente asunto se solicita.

En la diversa solicitud el particular se inconformó con la respuesta del sujeto obligado y presentó un recurso de revisión ante este Instituto, el cual fue turnado a la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez, bajo el número de expediente **RDA 5149/14**.

En la resolución del recurso mencionado, el Pleno de este Instituto decidió revocar la inexistencia declarada por la Procuraduría General de la República e instruyó a que al sujeto obligado realizara una búsqueda exhaustiva de la información



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

requerida en todas las unidades administrativas competentes, a efecto de entregar a la particular la versión pública de los expedientes de averiguación previa números **PGR/FEMOSPP/011/2002** y **PGR/FEMOSPP/002/2002**, en donde refirió se consignaron por el delito de genocidio a varias personas, incluido el ex presidente Luis Echeverría Álvarez.

En cumplimiento a la resolución diversa RDA 5149/14, la Procuraduría General de la República manifestó una imposibilidad material y jurídica para hacer entrega de la información, pues en los archivos de la Coordinación General de Investigación, se cuenta con un expediente de averiguación previa en trámite, en el cual se integraron copias simples de las averiguaciones previas requeridas por el solicitante.

Es preciso señalar que dicha indagatoria, sigue líneas de investigación diversas a las abordadas en los expedientes **PGR/FEMOSPP/011/2002** y **PGR/FEMOSPP/002/2002**, de acuerdo a lo manifestado por el propio sujeto obligado.

Ahora bien, es necesario recordar que en el presente recurso, a través de su escrito de alegatos, la Procuraduría General de la República manifestó que en averiguaciones previas diversas a las identificadas con los números **PGR/FEMOSPP/002/2002** y **PGR/FEMOSPP/011/2002**, se contiene información relativa a las indagatorias relacionadas con los sucesos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, sin embargo dichas averiguaciones previas se encuentran en trámite y son consideradas como información reservada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fracción III de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

Considerando todo lo expuesto, este Instituto determinó pertinente realizar un requerimiento de información adicional a efecto de que el sujeto obligado abundara en la explicación acerca de las diversas averiguaciones previas que contienen información relativa a las indagatorias relacionadas con los sucesos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971.

De esta manera, la Procuraduría General de la República informó que **con copia simple de las diligencias contenidas en las averiguaciones previas PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002, se dejó abierto un triplicado por cada una de las indagatorias consignadas**, toda vez que en los hechos investigados se advirtieron, a juicio del Agente del Ministerio Público de la



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

Federación (consignador), la probable participación de otra u otras personas como probables responsables, por lo que con base en esos triplicados se dio origen a nuevas indagatorias que se encuentran en integración.

Asimismo, señaló que los triplicados abiertos son los identificados con los números SEIDF/CGI/262/2007 y SEIDF/CGI/260/2007, ambos por el delito de genocidio y actualmente en trámite, hasta reunir los requisitos exigidos por la ley para determinar lo que a derecho corresponde.

Derivado de lo anterior este Instituto puede concluir que la Procuraduría General de la República no cuenta con una imposibilidad material para entregar la información solicitada, toda vez que de acuerdo a lo manifestado por el propio sujeto obligado las averiguaciones previas SEIDF/CGI/262/2007 y SEIDF/CGI/260/2007 —que se encuentran actualmente en trámite—, se desprenden de los triplicados abiertos de las averiguaciones PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002, las cuales ya fueron consignadas.

En este sentido es importante resaltar lo establecido en el artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental:

"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

[...]

III. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;

[...]

V. Información: La contenida en los documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título;"

De las disposiciones referidas, se advierte que la Ley tiene por objeto garantizar el acceso a la información contenida en los documentos que los sujetos obligados generen , obtengan , adquieran , transformen o conserven por cualquier título, documentos que se entenderán como cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración, favoreciendo siempre el principio de máxima publicidad.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

Ahora bien, de un análisis textual a la solicitud de información, lo único que se desprende es que el particular requirió copia en versión pública de los expedientes integrados en contra de Luis Echeverría Álvarez por el caso del 2 de octubre de 1968 y por el caso del 10 de junio de 1971.

De esta manera, el particular no manifestó que requería específicamente los expedientes **PGR/FEMOSPP/002/2002** y **PGR/FEMOSPP/011/2002**, sino la información que obra en ellos, la cual también obra en los expedientes **SEIDF/CGI/262/2007** y **SEIDF/CGI/260/2007**.

En apoyo a lo anterior, es necesario citar el Criterio 28/10 emitido por el Pleno de este Instituto, el cual establece lo siguiente:

"Cuando en una solicitud de información no se identifique un documento en específico, si ésta tiene una expresión documental, el sujeto obligado deberá entregar al particular el documento en específico. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene por objeto garantizar el acceso a la información contenida en documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título; que se entienden como cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados sin importar su fuente o fecha de elaboración. En este sentido, cuando el particular lleve a cabo una solicitud de información sin identificar de forma precisa la documentación específica que pudiera contener dicha información, o bien pareciera que más bien la solicitud se constituye como una consulta y no como una solicitud de acceso en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pero su respuesta puede obrar en algún documento, el sujeto obligado debe dar a la solicitud una interpretación que le dé una expresión documental. Es decir, si la respuesta a la solicitud obra en algún documento en poder de la autoridad, pero el particular no hace referencia específica a tal documento, se deberá hacer entrega del mismo al solicitante."

Con base en el criterio citado se puede afirmar que la Procuraduría General de la República tiene la obligación de entregar al particular la expresión documental en la que obre la información solicitada.

En el caso concreto el sujeto obligado manifestó que no cuenta con copia de las averiguaciones previas **PGR/FEMOSPP/002/2002** y **PGR/FEMOSPP/011/2002**, pues estas fueron consignadas y remitidas a instancias jurisdiccionales antes de la presentación de la solicitud; sin embargo la Procuraduría General de la República, no declaró la inexistencia de la información solicitada, debido a que en los



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

expedientes SEIDF/CGI/262/2007 y SEIDF/CGI/260/2007 obra la información que le interesa al particular.

Considerando lo anterior, este Instituto concluye que el sujeto obligado sí cuenta con una expresión documental que pueda atender lo solicitado por el particular, razón por la cual la Procuraduría General de la República no puede argumentar una imposibilidad material para entregar lo requerido.

- c) **Análisis de la competencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para determinar si en el caso concreto se actualiza la excepción de clasificación contemplada en el último párrafo del artículo 14, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.**

En este punto, resulta indispensable, analizar la competencia que tiene este Instituto, para interpretar para efectos del derecho de acceso a la información, la actualización de la excepción prevista en el último párrafo del artículo 14 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, consistente en que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.

Al respecto, debe tenerse en cuenta la sentencia del amparo 1371/2013, dictada por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el once de abril de dos mil catorce, el cual fue promovido en contra de la resolución del recurso de revisión RDA 2486/14 y su acumulado RDA 4291/13, emitida por este Instituto.

Al resolver dicho medio de defensa, se determinaron entre otras cuestiones, lo siguiente:

7.1. El IFAI sí tiene facultades para pronunciarse prima facie sobre violaciones graves de derechos humanos respecto de los hechos consignados en averiguaciones previas.

Contrario a lo asentado por el IFAI, dicho Instituto sí cuenta con facultades para pronunciarse prima facie sobre las violaciones graves de derechos humanos únicamente para efectos de asumir y ejercer sus propias competencias en materia de acceso a la información de las averiguaciones previas.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 168/2011 expresó lo siguiente:

*"Al respecto, esta Sala observa que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que las averiguaciones previas sobre hechos posiblemente constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad carecen del carácter de información reservada. **Esto no quiere decir que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública cuente con facultades para determinar si se han actualizado las hipótesis antes descritas, ni quiénes serían los responsables.***

*En primer término, los criterios bajo los cuales se consideran ciertos hechos como graves violaciones a derechos humanos han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que los delitos de lesa humanidad se encuentran tipificados en el Código Penal Federal y en el Estatuto de Roma. Así, la determinación correspondiente la harán las propias autoridades investigadoras, que en este caso fue la Procuraduría General de la República, **de modo que cualquier eventual pronunciamiento por parte del Instituto tendrá naturaleza prima facie** y se circunscribirá en las propias conclusiones de la autoridad investigadora, según consten en el expediente de averiguación previa. (...) **Adicionalmente, la calificación de los hechos dentro de alguna de las categorías en comento podrá realizarse por la autoridad judicial competente.***

Como se advierte de lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia asentó que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que las averiguaciones previas sobre hechos posiblemente constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad carecen del carácter de información reservada.

*Precisó que esto no quiere decir que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública cuente con facultades para determinar si se han actualizado las hipótesis antes descritas, ni quiénes serían los responsables; **sin embargo, apuntó que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública sí tiene competencia para pronunciarse prima facie sobre el hecho consistente en si una averiguación previa versa o no sobre violaciones graves a derechos humanos, aunque exclusivamente para efectos de brindar o no acceso a la información solicitada.***

De conformidad con la parte citada de la sentencia emitida para resolver el amparo número 1371/2013, se desprende que la autoridad jurisdiccional determinó que este Instituto sí tiene facultades para pronunciarse *prima facie* sobre violaciones graves de derechos humanos, únicamente para el efecto de asumir y ejercer la competencia en materia de acceso a la información de las averiguaciones previas.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

Asimismo, se retomó a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión número 168/2011, del cual se estableció que con base en lo dispuesto en la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, consistente en que las averiguaciones previas sobre hechos posiblemente constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad no tienen el carácter de información reservada. En ese sentido, este Instituto no cuenta con facultades para determinar si se han actualizado dichas hipótesis, ni determinar sobre quiénes serían los responsables.

Sin embargo, también se determinó que este Instituto sí cuenta con competencia para pronunciarse *prima facie* sobre el hecho consistente en si una averiguación previa versa o no sobre violaciones graves a derechos humanos, pero exclusivamente para efectos de brindar o no acceso a la información solicitada.

Es decir, de acuerdo a con la autoridad jurisdiccional, si bien es cierto que este órgano garante no cuenta con la competencia para determinar quiénes son los responsables y si éstos cometieron delitos de lesa humanidad o violaciones graves a derechos humanos, también lo es, que sí puede pronunciarse *prima facie* sobre si una averiguación previa versa o no sobre violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad; teniendo presente que dicho pronunciamiento sólo es para efectos de que se brinde o no el acceso a la información de las mismas.

En ese mismo sentido, en la sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el trece de marzo de dos mil catorce en el juicio de amparo 1189/2013-VIII, promovido en contra de la resolución emitida por este Instituto al recurso de revisión RDA 0791/12 BIS, se resolvió lo siguiente:

«[...] En ese contexto, de los razonamientos anteriores, se concluye que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en términos del artículo 37 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sí cuenta con facultades para interpretar si en el caso específico, opera la excepción de reserva prevista en el artículo 14, último párrafo, respecto de la averiguación previa número PGRITAMPS/MAT-III-2194/2010, relativa al caso de la masacre ocurrida en San Fernando, Tamaulipas en el año dos mil diez.

Asimismo, para determinar si el caso en concreto se ubica en dicha excepción de reserva, resulta incorrecto que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Datos Personales, respalde la reserva formulada por la Procuraduría General de la República, en términos de lo previsto en el artículo 16 del Código Federal de



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

Procedimientos Penales, toda vez que como se expuso en el presente fallo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya declaró que la restricción que prevé dicho precepto para el caso de las averiguaciones previas, es desproporcional y transgrede el derecho humano de acceso a la información.

*Finalmente, contrario a lo manifestado por el Instituto citado del contenido de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no se advierte que alguno de sus preceptos, prevea que debe existir un pronunciamiento sobre el caso en específico para que entonces el Instituto pueda determinar la procedencia de la excepción de reserva tratándose de averiguaciones previas, en las que los solicitantes consideren que la información se trata de violaciones graves a derechos humanos o de lesa humanidad, no obstante ello, existen diversos ordenamientos nacionales e internacionales e interpretaciones que prevén los lineamientos a seguir para llegar a esa determinación, por lo que como intérprete de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, está facultada para determinar si el caso concreto, esto es la masacre de San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en el año dos mil diez, se ubica o no, en la excepción de reserva, siguiendo los lineamientos básicamente, previstos en los artículos 149 y 149 bis del Código Penal Federal, que tipifica como delitos contra la humanidad y el genocidio; 7 del estatuto de Roma, que define qué se considera como delitos de lesa humanidad; así como los lineamientos previstos en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 1ª. XI/2012 (10a), de rubro **VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE LAS INVESTIGA**, que establece criterios cuantitativos (número, intensidad, amplitud, generalidad, frecuencia o su prolongación en el tiempo), y cualitativos (multiplicidad de violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo, especial, magnitud de las violaciones en relación a la naturaleza de los derechos afectados; y una participación importante del estado, a ser los actos cometidos por agentes estatales o con aquiescencia del estado) para determinar que una violación a derechos humanos es "grave", y subsumir el caso en concreto, esto es la masacre de San Fernando Tamaulipas ocurrida en el año dos mil diez a los preceptos y criterios descritos. [...]*»

De lo anterior se desprende, que la autoridad jurisdiccional concluyó que este Instituto sí tiene facultades para interpretar, sólo para efectos del acceso a la información, si en el caso en concreto operan o no los supuestos previstos en el último párrafo del artículo 14 de la *Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

Asimismo, se señaló que no es necesario que otra autoridad se pronuncie sobre si hubo o no violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, para que este Instituto pueda determinar, para efectos del derecho de acceso a la información, si se actualiza la excepción a la reserva prevista en el artículo 14, último párrafo de la ley de la materia.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

Debe tomarse en consideración, tanto los artículos 149 y 149 bis del *Código Penal Federal* y 7 del *Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional*; así como, los lineamientos previstos en la jurisprudencia de rubro «Violaciones graves a derechos humanos. Su concepto para efectos del derecho de acceso a la información de la averiguación previa que las investiga», la cual contiene los criterios cuantitativos y cualitativos a seguir.

Es decir, con la sentencia recaída al juicio de amparo número 1189/2013-VIII, se contempla nuevamente y con ello se reafirma, que este Instituto tiene competencia para determinar si se ubica o no en las excepciones de la reserva de la averiguación previa, al caso en concreto, por ser el intérprete de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, con lo que únicamente ejerce las facultades con las que cuenta.

En ese orden de ideas, conviene referir que en términos de los artículos 6 y 37, fracción I de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, corresponde a este Instituto interpretar el mencionado ordenamiento legal.

Con motivo de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, se conforma un bloque constitucional en materia de derechos humanos, pues los órganos de gobierno del Estado mexicano quedan obligados a respetar todo derecho humano previsto tanto en la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* como en todo Tratado Internacional del que México sea parte, esto es que se haya integrado a nuestro sistema jurídico con motivo de la suscripción por parte del titular del Ejecutivo Federal y aprobado por el Senado.

En tal sentido del artículo 1º de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* se desprende que en aras de brindar irrestricto respeto a los derechos humanos, todo órgano con facultades decisorias o de *imperium* debe respetar el principio *pro persona*; lo cual implica que la aplicación e interpretación de la norma siempre deberá ser tal que se favorezca en la mayor medida el otorgamiento y reconocimiento de los derechos humanos.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

Para tales efectos, se cuenta con la obligación de llevar a cabo un «control de convencionalidad»¹, que es precisamente armonizar el orden jurídico de tal suerte que su aplicación no vulnere ni restrinja en lo más mínimo cualquier derecho humano previsto en la Constitución Federal y los tratados internacionales y aún más, en la jurisprudencia convencional interamericana.

Sobre este punto, cabe señalar que en el expediente varios 912/2010, del catorce de julio de dos mil once, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al dar cumplimiento a la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el «Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos» en relación con lo establecido en el artículo primero constitucional, respecto a la obligación de todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, se pronunció, que si bien es cierto que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben aplicar las normas correspondientes a derechos humanos haciendo la interpretación más favorable a la persona con el fin de lograr una protección más amplia, no se tiene la posibilidad de la inaplicación o declaración de la incompatibilidad de las mismas, por todas las autoridades.

En ese sentido, el modelo de control de constitucionalidad y convencionalidad para nuestro país, dependerá de la autoridad encargada de aplicar normas que contengan derechos humanos. Por lo que, este Instituto, se encuentra en el supuesto de tipo de control denominado «Interpretación más favorable», al no ser un órgano jurisdiccional.

¹ Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Almonacid Arellano y otros*. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 124; *Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros)*. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párr. 128; *Caso La Cantuta*. Sentencia de 29 de septiembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 167; *Caso Boyce y otros*. Sentencia de 20 de noviembre de 2006. Serie C No. 169, párr. 78; *Caso Heliodoro Portugal*. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 154, párr. 179; *Caso Radilla Pacheco*. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 339; *Caso Manuel Cepeda Vargas*. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 208; *Caso Comunidad Indígena XákmokKásek*. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 311; *Caso Rosendo Cantú y otra*. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 219; *Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña*. Sentencia de 1 de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 202; *Caso Vélez Loor*. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 287; *Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia)*. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 106; *Caso Cabrera García y Montiel Flores*. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párrafos 223 a 235; *Caso Gelman*. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221, párr. 193; *Caso Fontevecchia y D'Amico*. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238, párr. 93; Véase también el Voto Razonado del Juez Ad Hoc Eduardo Ferrer MacGregor-Poisot en la sentencia del *Caso Cabrera García y Montiel Flores*. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220 y especialmente el engrose del asunto *Radilla Pacheco*, Resolución dictada por el Tribunal Pleno en el expediente varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

Por lo tanto, se considera que este Instituto, al hacer esta Interpretación no está invadiendo competencias de otras autoridades, sino por el contrario, se ejercen las facultades y atribuciones con las que cuenta.

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que este Instituto no determina qué es una violación grave de derechos humanos o un delito de lesa humanidad, sino que atendiendo a los criterios que sobre éstos ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Penal Internacional, realiza un pronunciamiento *prima facie* para poder establecer, si en el caso concreto, se produce la actualización de los supuestos contemplados en el artículo 14, último párrafo de la Ley de la materia, para efecto de otorgar o no el acceso a la información de la averiguación previa solicitada.

En conclusión, si bien este Órgano Colegiado no puede determinar quiénes son los responsables de un ilícito y si se configuró o no un tipo penal, **sí puede analizar si se actualiza la excepción prevista en el último párrafo del artículo 14 de la Ley de la materia**, para efectos de establecer si debe prevalecer el derecho de acceso a la información de la sociedad.

Determinada la competencia de este Instituto para pronunciarse *prima facie* sobre violaciones graves de derechos humanos y/o delitos de lesa humanidad, se analizará si en el caso concreto se actualiza la excepción prevista en el último párrafo del artículo 14 de la ley en comento, para efectos de brindar o no acceso a la información solicitada.

Determinada la competencia de este Instituto para pronunciarse *prima facie* sobre violaciones graves de derechos humanos y/o delitos de lesa humanidad, **se analizará si en el caso concreto se actualiza la excepción prevista en el último párrafo del artículo 14 de la ley en comento**, para efectos de brindar o no acceso a la información solicitada.

Al respecto, el artículo 14 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, señala en su parte conducente, lo siguiente:

Artículo 14. También se considerará como información reservada:

[...]

III. Las averiguaciones previas;

[...]



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

Cuando concluya el periodo de reserva o las causas que hayan dado origen a la reserva de la información a que se refieren las fracciones III y IV de este Artículo, dicha información podrá ser pública, protegiendo la información confidencial que en ella se contenga.

No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.»

En ese tenor, como se advierte en el último párrafo del artículo transcrito, se prevén dos supuestos en los que no procederá la reserva de la información, a saber:

- I. Violaciones graves a derechos fundamentales, y
- II. Delitos de lesa humanidad.

Por lo anterior, este Instituto realizará el análisis de procedencia de las excepciones antes citadas, respecto de la averiguación previa requerida en el caso que nos ocupa y con fundamento en el último párrafo del artículo 14 de la Ley de la materia.

Ahora bien, en virtud de que con anterioridad se determinó que la información que da respuesta a lo solicitado, está contenida en las averiguaciones previas SEIDF/CGI/262/2007 y SEIDF/CGI/260/2007, resulta importante señalar que de conformidad con lo manifestado por el sujeto obligado a través del desahogo al requerimiento de información adicional, ambas fueron abiertas **por el delito genocidio**, las cuales están en trámite.

d) Análisis del supuesto de delitos de lesa humanidad.

En este sentido, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido la siguiente tesis aislada:

Registro: 2000212

Tipo de Tesis: Aislada

Materia(s): Constitucional

Época: Décima Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1

Tesis: 1a. IX/2012 (10a.)

Página: 652



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

DERECHO A LA INFORMACIÓN. ACCESO A LAS AVERIGUACIONES PREVIAS QUE INVESTIGUEN HECHOS QUE CONSTITUYAN GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS O DELITOS DE LESA HUMANIDAD. En materia de derecho a la información pública, la regla general en un Estado democrático de derecho debe ser el acceso y máxima publicidad de la información. Sin embargo, la regla general presenta algunas excepciones, las cuales, por mandato constitucional, deben estar previstas en leyes en sentido formal y material. Una de estas excepciones es el caso de las averiguaciones previas, cuyo contenido debe considerarse como estrictamente reservado, en términos de lo dispuesto en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, y de los artículos 13, fracción V, y 14, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ahora bien, esta limitante tampoco puede considerarse como absoluta y presenta una excepción -de modo que estamos ante una excepción a la excepción- consistente en que, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no puede alegarse el carácter de reservado cuando la averiguación previa investigue hechos constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Las averiguaciones previas se mantienen reservadas en atención a que la difusión de la información contenida en ellas podría afectar gravemente la persecución de delitos y, con ello, al sistema de impartición de justicia. A pesar de lo anterior, la ley previó como excepción a la reserva de las averiguaciones previas aquellos casos extremos en los cuales el delito perseguido es de tal gravedad que el interés público en mantener la averiguación previa en reserva se ve superado por el interés de la sociedad en su conjunto de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables. Estos casos de excepción son las investigaciones sobre graves violaciones a derechos humanos y delitos o crímenes de lesa humanidad. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recuerda que el Tribunal Pleno reconoció en la tesis jurisprudencial P./J. 54/2008, el doble carácter del derecho de acceso a la información, como un derecho en sí mismo, pero también como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. En este sentido, el Tribunal Pleno destacó que el derecho de acceso a la información es la base para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo cual se perfila como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y, por ende, como una exigencia social de todo Estado de Derecho. En virtud de lo anterior, cobra una especial relevancia la necesidad de permitir el acceso a la información que conste en averiguaciones previas que investiguen hechos que constituyan graves violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, pues estos supuestos no sólo afectan a las víctimas y ofendidos en forma directa por los hechos antijurídicos, sino que ofenden a toda la sociedad, precisamente por su gravedad y por las repercusiones que implican.

Amparo en revisión 168/2011. Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, A.C. y otra. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

Al respecto, se ha argumentado que si bien es cierto que las averiguaciones previas, así como todos los documentos relacionados con ésta, independientemente de su contenido o naturaleza, tienen un carácter reservado, ya que su difusión podría afectar gravemente la persecución de delitos; existe una excepción a la reserva de las mismas, y es en aquellos casos en los cuales el delito perseguido es de tal gravedad, que el interés público en mantener la averiguación previa en reserva se ve superado por el interés de la sociedad en su conjunto de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables.

Ahora bien, es importante mencionar que el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, definió los **crímenes de lesa humanidad** como "serios actos de violencia que dañan a los seres humanos, al golpear lo más esencial para ellos: su vida, su libertad, su bienestar físico, su salud y/o su dignidad. Son actos inhumanos que por su extensión y gravedad van más allá de los límites de lo tolerable para la comunidad internacional, la que debe necesariamente exigir su castigo. Pero los crímenes de lesa humanidad también trascienden al individuo, porque cuando el individuo es agredido, se ataca y se niega a la humanidad toda. Por eso, **lo que caracteriza esencialmente al crimen de lesa humanidad es el concepto de la humanidad como víctima.**"²

La noción de crimen contra la humanidad obedece a la necesidad por parte de la comunidad internacional de reconocer que hay "*dictados elementales de la humanidad que deben reconocerse en toda circunstancia*"³ Busca la preservación, a través del derecho penal internacional, de un núcleo de derechos fundamentales cuya salvaguarda constituye una norma imperativa de derecho internacional.

A la luz del desarrollo del derecho internacional, tanto consuetudinario como convencional, **constituye crimen contra la humanidad el genocidio, el apartheid y la esclavitud. Asimismo, han sido considerados crímenes contra la humanidad la práctica sistemática o a gran escala del asesinato, la tortura, las desapariciones forzadas, la detención arbitraria, la reducción al estado de servidumbre, o trabajo forzoso, las persecuciones por motivos políticos, raciales, religiosos o étnicos, las violaciones y otras formas de abusos sexuales y la deportación o traslado forzoso de poblaciones con carácter**

² Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, sentencia del 29 de noviembre de 1996. Causa IT-96-22-T, párrafo 28 (traducción libre).

³ Documento de naciones Unidas S/1994/674, 27 de mayo de 1994, párrafo 73.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

arbitrario.⁴ Sobre este punto, tomando en cuenta el artículo primero constitucional puede advertirse que una violación a derechos humanos implica la vulneración a algún derecho reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o bien en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Cabe señalar que el genocidio ha sido históricamente reprobado en el ámbito internacional, pues es parte de lo que el derecho intencional cataloga como "*ius cogens*", en virtud de la aceptación y el reconocimiento universal de las normas que lo tipifican.

En seguimiento a lo anterior, es importante señalar que el Estado Mexicano es parte de la *Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio*, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 1952.

Ahora bien, este tipo de violaciones van en contra de la dignidad de las personas, por lo que la realización, aquiescencia u omisión en la prevención o sanción de este tipo de crímenes son incompatibles con la idea misma de un Estado democrático de derecho, con sus principios rectores, con su configuración y operación.

Estos delitos, entre otros actos, constituyen crímenes bajo el derecho internacional, por lo que el Estado tiene la obligación internacional de juzgar y castigar a los responsables de éstos, sin la posibilidad de alegar ya sea la obediencia debida o el cumplimiento de órdenes superiores para exonerarse de responsabilidad penal.

Por su parte, en el sistema jurídico nacional resulta importante abordar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mencionado sobre el particular, de acuerdo con el siguiente criterio:

Registro: 2000209

Tipo de Tesis: Aislada

Materia(s): Constitucional

Época: Décima Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1

⁴ Vid. Informe de la Comisión de Derecho Internacional, Documento de Naciones Unidas, Suplemento número 10 (A/51/10) pp. 100 y sts.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

Tesis: 1a. X/2012 (10a.)
Página: 650

DELITOS O CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE LOS INVESTIGA. De conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no puede alegarse el carácter de reservado cuando la averiguación previa investigue hechos constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. A fin de que el intérprete determine si un caso concreto se ubica en el supuesto de excepción relativo a los delitos de lesa humanidad y deba dar acceso a la averiguación previa correspondiente, es necesario que atienda, a nivel federal, al Título Tercero del Código Penal Federal, el cual tipifica como delitos contra la humanidad, en su artículo 149, a la violación a los deberes de humanidad respecto de prisioneros y rehenes de guerra y, en su artículo 149 bis, al **genocidio**. Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que el Estado mexicano ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en la capital italiana el 17 de julio de 1998. Asimismo, el 31 de diciembre de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se promulgó dicho Estatuto. Esta Primera Sala observa que el artículo 7o. del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, norma vigente en el ordenamiento jurídico mexicano, define los delitos o crímenes de lesa humanidad y establece un catálogo sobre las conductas que deberán considerarse como tales. Así, el asesinato; el exterminio; la esclavitud; la deportación o traslado forzoso de la población; la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; la tortura; la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional; la desaparición forzada de personas; el crimen de apartheid, así como otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física, serán considerados delitos o crímenes de lesa humanidad, tal y como los define el apartado segundo del párrafo primero del artículo 7o. del Estatuto de Roma. Asimismo, es importante señalar que estos delitos serán considerados como crímenes de lesa humanidad de conformidad con el Estatuto de Roma, únicamente cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque; entendiéndose por ataque generalizado contra la población civil la línea de conducta que implique la comisión de actos mencionados en el catálogo de referencia contra una multiplicidad de personas dentro de dicha población; mientras que por sistematizado debe entenderse que los actos se cometan de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política, es decir, en seguimiento de un plan preconcebido, lo cual excluiría a aquellos actos cometidos al azar.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

Como se observa, nuestro máximo tribunal determinó que para efectos del derecho de acceso a la información de la averiguación previa, tratándose de delitos o crímenes de lesa humanidad el intérprete debe tomar en consideración el Título Tercero del *Código Penal Federal*, que tipifica como delitos contra la humanidad, en su artículo 149, a la violación a los deberes de humanidad respecto de prisioneros y rehenes de guerra y, en su artículo 149 bis, al genocidio. Así como, el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que también contempla otros actos considerados como delitos de lesa humanidad.

Asimismo, de la tesis en cita se desprende que estos delitos **serán considerados como crímenes de lesa humanidad** de conformidad con el Estatuto de Roma, únicamente cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y con conocimiento de dicho ataque.

Por **ataque generalizado** contra la población civil se entiende la línea de conducta que implica la comisión de los actos mencionados contra una multiplicidad de personas dentro de dicha población; mientras que por sistematizado debe entenderse que los actos se cometan de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política, es decir, en seguimiento de un plan preconcebido, lo cual excluiría a aquellos actos cometidos al azar.

Por otra parte, tal como se señala en la tesis citada, a nivel federal en el Título Tercero del *Código Penal Federal*, se tipifican los delitos contra la humanidad en el artículo 149 a la violación a los deberes de humanidad respecto de prisioneros y rehenes de guerra y, en su artículo 149 bis, al genocidio que es aquel que se comete con el propósito de destruir, total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetrándose por cualquier medio, delitos contra la vida de miembros de aquellos, o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo.

En ese sentido, resulta importante aludir a la siguiente información pública oficial relacionada con el caso que nos ocupa:

- Expediente de averiguación previa con número PGR/FEMOSPP/002/2002.

En relación con la averiguación previa en comento, que está relacionada con los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, se localizó el Sexto Informe de Labores



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

de la Procuraduría General de la República, del 1° de septiembre de 2006⁵, en el cual se informó lo siguiente:

En relación a la averiguación previa PGR/FEJMOSEPP/002/2002, se realizaron las siguientes actuaciones:

1. La AP antes referida se consignó el 19 de septiembre de 2005, por el AMPF adscrito a la Oficina del Fiscal Especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, quien ejerció acción penal en contra de Luis Echeverría Álvarez y otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de genocidio, previsto y sancionado por el Artículo 149 BIS en su párrafo primero, segundo y quinto y PIL en su modalidad de plágio a secuestrado, previsto y sancionado por el Artículo 364, fracción I, con relación al diverso 366, fracciones I, II y IV del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, vigente en la época de los hechos enjuiciados. Constituye una innovación en dicha indagatoria la acreditación de hechos delictivos perpetrados antes, durante y después de la emblemática fecha del 2 de octubre de 1968, acontecidos dentro de tres diferentes hipótesis del delito de genocidio y sucesos en eventos diversos.
2. De la enjuiciación realizada por esta Oficina del Fiscal Especial correspondió conocer al Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, quien con fecha 19 de septiembre de 2005, radicó el expediente bajo la Causa Penal 79/2005-I, dando los avisos de ley así como la intervención que legalmente corresponde al Representante Social Federal de la adscripción.
3. El mencionado órgano jurisdiccional de la Federación emitió su resolución el 21 de septiembre de 2005, declarando por una parte prescrita la acción penal del delito de genocidio y decretando el sobreseimiento de la causa, respecto de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, México, en esta ciudad capital, con respecto a todos los inculcados, excepto Luis Echeverría Álvarez, para quien se tuvo por no acreditado el cuerpo del delito de genocidio. También se tuvo por no comprobada la probable responsabilidad de Luis Echeverría Álvarez, Luis de la Barrera Moreno y Miguel Nasser Haro en la comisión del delito de PIL en su modalidad de plágio a secuestrado, cometido en agravio de Hector Jaramillo Chávez o Héctor Jaramillo.
4. Dicha determinación fue notificada tanto al AMPF de la adscripción, como al que ejerció acción penal por parte de la Oficina del Fiscal Especial el 21 de septiembre de 2005 y el 26 del mismo mes y año, fue impugnada por ambas instancias de la PGR, mediante el recurso de apelación correspondiente.
5. El correspondiente recurso de apelación fue admitido por auto del 27 de septiembre del 2005, por haberse presentado en tiempo y forma.
6. Una vez recibido el expediente por el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, a quien correspondió conocer del recurso planteado, éste se registró bajo el Tope Penal 461/2005-II señalándose las 10:00 horas del 4 de noviembre de 2005, para la celebración de la audiencia de vista, en la cual la Representación Social de la Federación formuló sus respectivos agravios.



⁵ Disponible para consulta en http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/Documentos/Informes%20Institucionales/VI_inform_e_labores.pdf



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

7. El 11 de noviembre de 2005 se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitud de ejercicio de la Facultad de Atracción del Recurso de Apelación radicado con número de Toca Penal 461/2005, en el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, interpuesto en contra de la resolución dictada dentro de la causa penal 78/2004, por el Juez Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, solicitud que se turnó a esa H. Primera Sala del Máximo Tribunal, en donde se registró su ingreso con el número de expediente 20/2005.
8. Radicada que fue la solicitud de ejercicio de Facultad de Atracción en esa H. Primera Sala, se formó el expediente número 2/2005-PS, y el 24 de noviembre de 2005 se turnó a la Ponencia del Ministro Juan N. Silva Méza a fin de que elaborara el Proyecto de Resolución respectiva.
9. En sesión celebrada el 11 de enero del año 2006 se resolvió, por mayoría de tres votos en contra, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ejercitaría la Facultad de Atracción del referido expediente.
10. Con fecha 26 de abril de 2006 se agregó a los autos el oficio número FEMOSPP/DGIMB/212/2006, de fecha 10 del abril del año en curso, informando al Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mediante oficio 1108 de fecha 21 de abril del año en curso, se enviaron los autos y demás constancias que integran tanto la causa penal número 78/3-1 como el Toca Penal 461/2005-II, al Magistrado del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito de su procedencia, a efecto de que dicho Magistrado dicte la resolución que conforme a Derecho proceda.
11. De la consignación de la indagatoria PGR/FEMOSPP/002/2002 se acordó dejar triplicado abierto de la consignación a la cual le correspondió el número PGR/FEMOSPP/052/2005, dentro de la cual se prosiguen líneas de investigación tendientes a identificar casos de personas detenidas y posteriormente desaparecidas, para acreditar el delito de PIL en su modalidad de plagio o secuestro y comprobar la probable responsabilidad de quienes resulten inculcados en su comisión.

Entre otras de las AP relevantes se lleva a cabo la integración de la PGR/FEMOSPP/015/2002, iniciada con motivo de la denuncia interpuesta por la dirigencia del PRD, con relación a 663 homicidios perpetrados desde el año de 1988 a 2002, en contra de militantes y simpatizantes de su partido, en diversas entidades federativas de la República Mexicana.

También se encuentra en proceso dentro de esta clasificación la integración de la averiguación previa PGR/FEMOSPP/016/2002, que corresponde a los hechos ilícitos ocurridos en el denominado *Udo de Aguas Blancas*, Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, en los cuales resultaron 17 personas muertas y alrededor de 43 lesionados con motivo de la agresión por parte de autoridades locales.

Igualmente, con relación al caso del 10 de junio de 1971, se dejó abierto el triplicado correspondiente, asignado bajo el número PGR/FEMOSPP/061/2004, y para su debida integración y prosecución se siguen las líneas de investigación tendientes a identificar casos de personas detenidas y posteriormente desaparecidas, para acreditar el delito de PIL en su modalidad de plagio o secuestro y comprobar la probable responsabilidad de quienes resulten inculcados en su comisión.

Al mes de diciembre de 2005 se continúa con la integración, prosecución y perfeccionamiento de 12 averiguaciones previas.

Como se advierte, la Fiscalía Especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, integró la averiguación previa número PGR/FEMOSPP/002/2002 (la cual es parte de la información solicitada por el hoy recurrente). Dicha indagatoria fue **concluida y consignada el 19 de septiembre de 2005** y fue radicada en el Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Distrito Federal.

La consignación se realizó por la probable participación de los indiciados, en la comisión de los delitos de **genocidio** y **privación ilegal de la libertad**. Dicha consignación también se refiere en el Sexto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, Apartado Procuración de Justicia⁶, en el que se

⁶ Disponible para consulta en



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

Menciona lo siguiente:

- [...]
- El 19 de septiembre de 2005; se consignó la averiguación previa PGR/FEMOSPP/002/2002 de represión al movimiento estudiantil y popular de 1968, ejercitándose acción penal en contra de Luis Echeverría Álvarez y otros, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de genocidio y privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro; el 21 de septiembre del mismo año se emitió resolución que declara, por una parte, prescrita la acción penal del delito de genocidio y decreta, por otra parte, el sobreseimiento de la causa, misma que fue impugnada mediante Recurso de Apelación.
 - El 30 de junio de 2006 fue resuelto el recurso de apelación en donde se dictó orden de aprehensión en contra de Luis Echeverría Álvarez por su probable responsabilidad en la comisión del delito de genocidio, y se decretó el sobreseimiento a favor de los demás inculcados por prescripción de la acción penal. El 8 de julio de 2008 el juez resolvió en el auto de término, que la acción penal derivada del delito de genocidio se encontraba prescrita y en consecuencia sobreseyó la causa penal y decretó la libertad del indiciado. El 10 de julio, la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) interpuso recurso de apelación. El 19 de septiembre la representación social de la Federación formuló pedimento de agravios.
 - El 11 de noviembre de 2005 se solicitó el ejercicio de la Facultad de Atracción del Recurso de Apelación, donde se acordó dejar abierto por triplicado de la consignación, dentro de la cual se prosiguen líneas de investigación tendientes a identificar casos de personas detenidas y posteriormente desaparecidas.

[...]

Asimismo, este Instituto localizó el Boletín 1124/05⁷, el cual señala lo siguiente:

[...]

APELA LA OFICINA DEL FISCAL ESPECIAL LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL JUEZ, CON RELACIÓN A LA CONSIGNACIÓN DEL EXPEDIENTE SOBRE LA REPRESIÓN DEL MOVIMIENTO POPULAR Y ESTUDIANTIL DE 1968

Con motivo de la consignación de la averiguación previa PGR/FEMOSPP/002/2002, realizada el 19 de septiembre del año en curso, se inició la causa penal 78/2005-I, por el Juez Decimoquinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, el cual, mediante auto dictado el 21 del mismo mes a las 22:00 horas negó las órdenes de aprehensión solicitadas por la Oficina del Fiscal Especial en contra de ocho ex servidores públicos, por los delitos de genocidio y privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro.

<http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/Documentos/Informes%20Institucionales/PND6-2.pdf>

Disponible para consulta en <http://www.pgr.gob.mx/cmsocial/bol05/sep/b112405.htm>



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

Al respecto, la Oficina del Fiscal Especial manifiesta, con todo respeto, su más absoluto desacuerdo con el sentido de la extemporánea resolución judicial, así como con las consideraciones en que ésta pretende ser fundada, dado que, como reconoce el propio juzgador, para emitir la misma analizó parcialmente los elementos de prueba recabados por esta Oficina en el expediente consignado.

1.- Con relación al delito de genocidio consignado.

a) Imprescriptibilidad del delito de genocidio.

El juez se limita a analizar los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, cuando la represión gubernamental fue perpetrada a través de conductas delictivas desplegadas antes, durante y después de esa fecha, en agravio de los integrantes del Movimiento Popular y Estudiantil de 1968, grupo nacional opositor al régimen; conductas que constituyen un genocidio continuado, cuya proyección en el tiempo va más allá de la matanza ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas.

La Oficina del Fiscal Especial reitera que conforme al derecho internacional aplicable en México, el genocidio es un delito que no es prescriptible.

Suponiendo sin conceder prescriptible al genocidio, el juez no toma en consideración las "actuaciones practicadas en averiguación del delito y de los delincuentes", que interrumpen dicho cómputo y que obran en la averiguación consignada. Desestima sin razón la denuncia formulada ante la Procuraduría General de la República en 1998 así como otras actuaciones intermedias interruptoras del plazo.

Asimismo no se valoran la falta de condiciones para la adecuada e imparcial investigación de los hechos y juzgamiento de los comitentes del genocidio, que gozaron de una inmunidad de hecho, lo cual también debe considerarse en la interrupción del plazo de la prescripción, pues ha de recordarse que en esa época sólo se investigó y procesó a miembros del grupo nacional victimizado.

Reconoce que no ha operado la prescripción respecto del inculpado Luis Echeverría Álvarez, por haberse interrumpido la misma dada la inmunidad que le otorgaba el haber gozado del fuero constitucional hasta el 30 de noviembre de 1976.

Al querer ajustarse a la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre los hechos del 10 de junio de 1971, olvida que se trata de asuntos y casos evidentemente distintos.

b) Sobre el cuerpo del delito de genocidio.

El juzgador no agotó el estudio de los elementos constitutivos del cuerpo del delito de genocidio y se limita a analizar el relativo al concepto de grupo nacional. Considera que no existe un grupo "en el sentido del tipo" nacional, aduciendo que no está acreditado su estabilidad y existencia de "características esenciales comunes que los



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

identifiquen de otros de su mismo género", negando valor a las constancias aportadas por el Ministerio Público de la Federación en el expediente, que comprueban lo contrario, como son declaraciones, documentos e informes de la Dirección Federal de Seguridad, con los que se acredita fehacientemente, el agrupamiento de los integrantes del Movimiento Popular y Estudiantil de 1968 en una estructura unificada bajo una dirección (Consejo Nacional de Huelga) y con una bandera de lucha común distintiva: el llamado Pliego Petitorio; grupo surgido en el seno de la nación mexicana, que se mantuvo en forma permanente antes, durante y después del 2 de octubre de ese año.

c) Sobre la probable responsabilidad en el genocidio.

Derivado de esta visión simplista cuanto omisa de los hechos consignados, ¡el juzgador se abstiene de entrar al análisis de la probable responsabilidad de los inculpados!

2. Sobre el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro.

A la par de la consignación realizada por genocidio, el Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal por el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio o secuestro, cometido en agravio Héctor Jaramillo Chávez, quien ante el encarcelamiento de los dirigentes históricos del Movimiento Popular y Estudiantil de 1968, continuó desarrollando el activismo político, erigiéndose en connotado líder del mismo, hasta su detención y posterior desaparición.

A este respecto, el juez consideró que el cuerpo del delito había quedado plenamente acreditado, pero en cambio, desechó los argumentos y elementos probatorios obrantes en la averiguación previa consignada, mediante los que se demuestra la probable responsabilidad del entonces Secretario de Gobernación y sus subalternos, pues obran en el expediente informes oficiales de que Héctor Jaramillo Chávez fue detenido por elementos de la Dirección Federal de Seguridad.

Cabe apuntar que la Oficina del Fiscal Especial, se vio en la necesidad de recurrir, en vía de queja ante el superior jerárquico del juez, ante el injustificado retraso para emitir la resolución dentro del plazo legal.

Vistas las manifiestas irregularidades en que incurrió el juez de la causa al dictar su resolución, la Oficina del Fiscal Especial procederá a interponer, dentro del término concedido para ello, la apelación correspondiente y agotará todas las instancias a fin de que sea resarcido el orden jurídico violentado.

En todo caso, respecto de los ilícitos consignados, el juez no ha cancelado la posibilidad de su procesamiento, puesto que ordenó devolver el expediente a la Oficina del Fiscal Especial para su eventual perfeccionamiento. De este modo el caso no ha concluido.

[...]



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

De lo anterior se advierte que la propia Procuraduría General de la República ha manifestado que la averiguación previa número PGR/FEMOSPP/002/2002, relativa a la represión al movimiento estudiantil y popular de 1968, fue consignada y se ejerció acción penal en contra de Luis Echeverría Álvarez y otros, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de genocidio y privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro.

Aunado a lo anterior, este Instituto advirtió que en el recurso de revisión con número de expediente 1311/10, resuelto por el Pleno en sesión celebrada el 09 de diciembre de 2009, un particular presentó una solicitud de información ante la Procuraduría General de la República, mediante el cual requirió en archivo electrónico en disco o CD, la versión publica de la averiguación previa relativa a los hechos del 2 oct de 1968 en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco, número PGR/FEMOSPP/002/2002.

Así pues, en respuesta a la diversa solicitud, la Procuraduría General de la República, por conducto de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, señaló lo siguiente:

- Que en razón de los acontecimientos ocurridos el 02 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas de la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, en el Distrito Federal, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado tramitó la averiguación previa número PGR/FEMOSPP/002/2002.
- Que una vez realizada la investigación correspondiente, la Fiscalía mencionada ejerció acción penal contra el ex Presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez y otros.
- Que de la consignación correspondió conocer al Juez Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, el cual radicó la indagatoria bajo el número de causa penal 78/05.
- Que la Unidad de Enlace no era el medio idóneo para proporcionar la documentación solicitada, toda vez que se trata de información o documentación que pertenece a una averiguación previa actualmente consignada.
- Que ya no tenía facultad alguna como autoridad para proporcionar acceso a la información sobre una averiguación previa que se encuentra consignada ante un Juez de Distrito del Poder Judicial.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

- Por lo anterior, sugirió al diverso particular dirigir su solicitud ante el Consejo de la Judicatura Federal.

Inconforme con la respuesta proporcionada, el particular impugnó la negativa de acceso a la averiguación previa peticionada.

Por su parte el sujeto obligado, mediante su escrito de alegatos reiteró su respuesta inicial y manifestó que la información solicitada fue consignada y correspondió conocer al Juez Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, quien radicó la averiguación previa bajo el número de causa penal 78/05.

En ese orden de ideas, dio a conocer que remitió al Juzgado antes referido los expedientes correspondientes, tanto en original como en duplicado, dando con esto cumplimiento a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Penales. Por lo anterior, **precisó que la indagatoria referida ya no se encontraba en sus archivos.**

Así pues, el Pleno de este Instituto, en sesión de fecha 26 de mayo de 2010, resolvió lo siguiente:

[...]

*En consecuencia, con fundamento en el artículo 56, fracción III de la LFTAIPG, resulta procedente **revocar** la respuesta de la PGR y se le **instruye** para que, con fundamento en los artículos 43 de la LFTAIPG; 41 y 70, fracción IV de su Reglamento, y el primero y séptimo de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y en los Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, **elabore y entregue al ahora recurrente, previo pago de los costos respectivos, versión pública de la averiguación previa número PGR/FEMOSPP/002/2002, en la que se omitan únicamente datos personales de quienes se relacionen o mencionen en dicha indagatoria.***

[...]

Como se desprende de lo anteriormente referido, en el diverso expediente el sujeto obligado también señaló que no tenía la información relativa al expediente número PGR/FEMOSPP/002/2002, toda vez que dicha información había sido remitida al Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, tanto en original como en duplicado, dando con esto cumplimiento a lo establecido en el tercer párrafo del



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo cual la indagatoria referida ya no se encontraba en sus archivos.

En este tenor, se desprende que la respuesta otorgada a la diversa solicitud presentada el 09 de diciembre de 2009, está relacionada con los argumentos referidos en la solicitud que nos ocupa, toda vez que se mencionó igualmente que no tenía la información debido a que la averiguación previa con número PGR/FEMOSPP/002/2002 fue consignada por la entonces Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, el 18 de septiembre de 2005, al Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, mismo que se radicó bajo la causa penal 78/05.

Sin embargo, se advirtió que en cumplimiento a la diversa resolución recaída al recurso de revisión 1311/10, el sujeto obligado, mediante el oficio número SJA/DGAJ/04804/2010, de fecha 17 de agosto de 2010, signado por el Director de Asuntos Jurídicos, informó lo siguiente:

[...]

Me permito hacer de su conocimiento, que en debido cumplimiento a la resolución dictada el veintiséis de mayo del año en curso, por el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información, dentro del recurso de revisión número: 1311/10, al respecto, me permito comunicarle que su solicitud, se derivó para su atención a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, a través de la Coordinación General de Investigación, señalando lo siguiente:

...

Ahora bien, hago de su conocimiento que existe diversa indagatoria, donde obra copia de la citada averiguación PGR/FEMOSPP/002/2002, por lo que a efecto de estar en posibilidades de atender en tiempo y forma el cumplimiento de la Resolución de mérito, se realizaron las labores necesarias para contabilizar el número de fojas que forman parte de las actuaciones, el pliego de consignación y los anexos, que integraron la Averiguación Previa número PGR/FEMOSPP/002/2002(copia), dando como resultado un gran total de 44,838 fojas.

[...]

En este sentido, el sujeto obligado en cumplimiento a diversa resolución de este Instituto, puso a disposición del particular en copia simple la versión pública de la averiguación previa número PGR/FEMOSPP/002/200, dando un total de 44, 838 fojas útiles previo pago de derechos por reproducción y envío, anexando la ficha de pago correspondiente.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

▪ Expediente de averiguación previa con número
PGR/FEMOSPP/011/2002.

La averiguación previa PGR/FEMOSPP/011/2002 está relacionada con los hechos del 10 de junio de 1971 y los probables delitos de genocidio de conformidad con el Programa Jurídico Ministerial "B",⁸ mismo que señala lo siguiente:

[...]

MÉTODO DE TRABAJO

[...] II. A.P. PGR/FEMOSPP/011/2002.

Por lo que hace a la Averiguación Previa Iniciada en esta instancia por los hechos del 10 de junio de 1971, procédase a continuarla en sus trámites de la siguiente manera:

- a. Iníciase y ratifíquese a los denunciantes de los hechos acontecidos el 10 de junio de 1971 y por los delitos de genocidio y los que resulten, en contra de quienes resulten responsables.
- b. Díctese el Acuerdo respectivo sobre las diversas actuaciones ministeriales que deben realizarse.
- c. En cumplimiento a ese Acuerdo practíquense las diligencias respectivas y las que resulten de ellas.
- d. Gírense oficios al Archivo General de la Nación para que se acredite al personal de la Oficina del Fiscal para revisar el archivo histórico que ahí se tenga y se recabe lo que sea de utilidad para la investigación del 10 de junio de 1971 y lo relacionado con la manifestación estudiantil y los "Halcones", durante y después de esa fecha.
- e. Gírese Oficio a diversas Dependencias del Sector Público que refieren los denunciantes, así como las que estime la Oficina del Fiscal necesarias en el curso de la Investigación.
- f. Constitúyase personal de la Oficina del Fiscal a dependencias públicas o privadas para recabar, cotejar o certificar documentación que sea de utilidad para la averiguación previa en mención.
- g. Declárese al Licenciado Luis Echeverría Álvarez y al Licenciado Alfonso Martínez Domínguez, quienes tenían el carácter de Presidente de la República y de Regente de la Ciudad de México en los hechos del 10 de junio de 1971, así como a todos los demás servidores públicos que se desempeñaron en diversos cargos en esa fecha y se les involucra como presuntos responsables en la comisión de dichos ilícitos y demás personas que les resulte cita.
- h. Recábese copia certificada de las actas de defunción que se indiquen.
- i. Declárese a todas aquellas personas que se consideren víctimas o testigos de los hechos del 10 de junio de 1971 y agréguese sus testimonios y pruebas que deseen aportar a la A.P. PGR/FEMOSPP/011/2002.
- j. Recíbanse denuncia y averiguación previa que sean turnadas y de estar directamente relacionadas con los hechos del 10 de junio de 1971, agréguese o acumúlense a la A.P. PGR/FEMOSPP/011/2002.

⁸ Disponible para consulta en http://www.htm.pgr.gob.mx/femospp/prog_b2.htm



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

- Intégrese la A.P. CUTH-2T3/02760/02/00, recibida previa solicitud a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por así corresponder en su relación con los hechos que se investigan en la A.P. PGR/FEMOSPP/011/2002.

k. En su oportunidad resuélvase lo que proceda conforme a derecho.

[...]

La averiguación PGR/FEMOSPP/011/2002 está conformada por trece volúmenes en el que se acumularon otras averiguaciones previas, los expedientes transferidos por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y demás información relacionada, específicamente, con información de los hechos acontecidos el 10 de junio de 1971 en las inmediaciones de la Avenida San Cosme⁹.

La averiguación previa, casi en su totalidad, fue integrada por el ex-agente del Ministerio Público Américo Irineo Meléndez Reina quien renunció al cargo en junio de 2004. Fue reemplazado por César Augusto Osorio y Nieto, cuya llegada permitió la integración de nuevas pruebas a la averiguación previa, entre ellas, testimonios recogidos por el fiscal en Washington unas horas antes de que concluyera el pliego consignatario.

Habiéndose integrado dicha indagatoria, se procedió a elaborar la consignación correspondiente. El 23 de julio del 2004 se ejercitó acción penal contra los probables responsables por los mencionados hechos ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, el cual dio inicio a la causa penal 114/2204. No obstante, el día 24 de julio de 2004, el titular del citado Juzgado declaró extinta la acción penal respecto del delito de genocidio a favor de los inculpados y decretó el sobreseimiento de la causa penal. Inconforme con dicha resolución, el Ministerio Público de la Federación interpuso el recurso de apelación el 26 de julio de 2004. Actualmente, se encuentra radicada la apelación en el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito.

En este sentido, cabe señalar que este Instituto advirtió que en el recurso de revisión con número de expediente 1005/04, resuelto por el Pleno en sesión celebrada el 07 de diciembre de 2004, un particular presentó el 03 de agosto de 2004 una solicitud de información ante la Procuraduría General de la República, mediante la cual requirió copia simple del expediente de la averiguación previa PGR/FEMOSPP/011/2002 abierto por la Fiscalía Especial para Movimientos

⁹ Disponible para consulta en http://www.htm.pgr.gob.mx/femospp/tercer_inf/progb.htm



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

Sociales y Políticos del Pasado, mediante la cual se consigna por el delito de genocidio a diversas personas.

En su respuesta, la Procuraduría General de la República manifestó que la información solicitada no existía en sus archivos, en virtud de que la averiguación previa fue consignada el **06 de agosto de 2004**, ante el **Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales** con residencia en el Distrito Federal.

Asimismo, el sujeto obligado manifestó que en sus archivos no obra duplicado ni triplicado de la averiguación previa solicitada por el recurrente, ya que fue consignada al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en el Distrito Federal.

Inconforme con la señalada respuesta proporcionada, el particular impugnó la negativa de acceso a la averiguación previa peticionada. Por su parte el sujeto obligado, mediante su escrito de alegatos reiteró su respuesta inicial.

Adicionalmente, en una audiencia celebrada en este Instituto, la Procuraduría General de la República manifestó que las actuaciones del Ministerio Público se expiden por duplicado y en algunos casos por triplicado, no teniendo obligación legal de mantener una copia en sus archivos y que en el presente caso el original y la copia se entregaron al Juzgado.

Así pues, el **Pleno de este Instituto, en sesión celebrada el 07 de diciembre de 2004**, resolvió lo siguiente:

[...]

Por lo tanto y con fundamento en los artículos 43 de la Ley, 41 y 70, fracción IV de su Reglamento y Séptimo de los Lineamientos Generales, resulta procedente **revocar la declaración de inexistencia efectuada por la Procuraduría, ya que de conformidad con el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Penales, debiera obrar en su archivo copia de la averiguación previa solicitada y se instruye a la Procuraduría que otorgue acceso a una versión pública del expediente de la averiguación previa PGR/FEMOSPP/011/2002 solicitada en la que se omitan los documentos o las partes o secciones considerados como confidenciales, de acuerdo con los artículos señalados en el considerando anterior. La versión pública deberá incluir la resolución emitida por el Comité de Información, en la que confirme la clasificación de las partes o secciones que fueron eliminadas, lo anterior según lo previsto en los artículos 70, fracción IV y 72 del Reglamento de la Ley.**

[...]



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

Como se desprende de lo anteriormente referido, en el diverso expediente el Pleno de este Instituto resolvió revocar la inexistencia de la información, ya que de conformidad con lo señalado en el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Penales, debiera obrar en su archivo copia de la averiguación previa solicitada e instruyó a la Procuraduría General de la República a otorgar el acceso a la versión pública del expediente de la averiguación previa **PGR/FEMOSPP/011/2002**.

De esta suerte, se advirtió que en cumplimiento a la diversa resolución recaída al recurso de revisión **1005/14**, el 26 de enero de 2005 el sujeto obligado remitió un correo electrónico al particular, mediante el cual le comunicó lo siguiente:

[...]

Anexo sírvase encontrar archivo en formato pdf con el oficio a través del cual se hace de su conocimiento que la información solicitada se encuentra a su disposición en versión pública y copia simple en esta Unidad de Enlace de Acceso a la Información, dando cabal y estricto cumplimiento a la resolución emitida por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

[...]

En este sentido, se advierte que en cumplimiento a la diversa resolución, el sujeto obligado puso a disposición del particular en copia simple, la versión pública de la averiguación previa número **PGR/FEMOSPP/011/2002**.

De lo anterior es posible arribar a las siguientes conclusiones:

- Las averiguaciones previas **PGR/FEMOSPP/002/2002** y **PGR/FEMOSPP/011/2002**, refieren a los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 y al 10 de junio de 1971, respectivamente, en donde refirió se consignaron por el delito de genocidio a varias personas, incluido el ex presidente Luis Echeverría.
- Al respecto, si bien dichas averiguaciones previas ya fueron consignadas, tal como lo manifestó el sujeto obligado, la copia de las mismas obra en los expedientes **SEIDF/CGI/262/2007** y **SEIDF/CGI/260/2007**.
- La Procuraduría General de la República ha manifestado a través de diversos medios, que las averiguaciones previas **PGR/FEMOSPP/002/2002** y **PGR/FEMOSPP/011/2002**, están relacionadas con la investigación de genocidio.
- El Pleno de este Instituto se ha pronunciado a través de diversas resoluciones (**RDA 5149/14**, **RDA 1005/14**, **1311/10**) por la entrega de las



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

**averiguaciones previas PGR/FEMOSPP/002/2002 y
PGR/FEMOSPP/011/2002, en versión pública.**

Luego entonces, y toda vez que en las averiguaciones previas PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002, subsumidas a los expedientes SEIDF/CGI/262/2007 y SEIDF/CGI/260/2007, se consignaron por el delito de genocidio a varias personas, incluido el ex presidente Luis Echeverría Álvarez, por los sucesos acontecidos el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, se advierte que en éstas últimas obra la información que es de interés del solicitante.

Por tanto, de conformidad con el análisis realizado, es posible determinar que existen elementos para que en la especie se actualice la excepción prevista en el último párrafo del artículo 14, de la Ley de la materia, toda vez que las averiguaciones previas PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002 están relacionadas con delitos de lesa humanidad, específicamente con genocidio.

En ese sentido, resulta pertinente reiterar que reservar la información podría generar un daño mayor, comparado con el perjuicio que pudiera causarse con la difusión de la misma, es decir, con la publicidad de las averiguaciones previas, se protege un bien jurídico supremo al que se pretende cuidar con la reserva de la información.

Asimismo, se reitera que el propio sujeto obligado manifestó que la información requerida por el particular ya había sido objeto de estudio de este Instituto; en ese sentido se puede afirmar que en diversos precedentes se determinó que el sujeto obligado entregara las versiones públicas de los expedientes relacionados con los hechos ocurridos el 02 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971.

Ahora bien, tal como se determinó con anterioridad, la información solicitada obra en diversos expedientes de averiguación previa, algunos de ellos ya no están en posesión del sujeto obligado, sin embargo éste si cuenta con algunos expedientes que se originaron por ser copias en triplicado de los expedientes originales en los que obra la información; de tal suerte que el sujeto obligado cuenta con las constancias documentales necesarias para poder atender la presente solicitud de información.

Por todo lo expuesto, este Instituto determina que el agravio del recurrente es **fundado**. Lo anterior, toda vez que la clasificación manifestada en la respuesta no



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

encuentra sustento debido a que en el presente caso se actualiza el supuesto previsto en el último párrafo del artículo 14 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

En consecuencia, con fundamento en el artículo 56, fracción III de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, este Instituto considera procedente **REVOCAR** la respuesta proporcionada por la Procuraduría General de la República.

En ese tenor, se **INSTRUYE** al sujeto obligado para que entregue la información solicitada, es decir, la **versión pública de los expedientes de las averiguaciones previas PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002**, relacionadas con los hechos ocurridos el 02 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, mismas que obran inmersas en los expedientes identificados como **SEIDF/CGI/262/2007 y SEIDF/CGI/260/2007**, por lo tanto, el sujeto obligado deberá localizar en éstos últimos, las documentales que forman parte de las averiguaciones previas **PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002** y **entregar únicamente las versiones públicas de éstas**, en las cuales se consignó por el delito de genocidio a varias personas, incluido el ex presidente Luis Echeverría Álvarez.

En relación a lo anterior, y toda vez que en la solicitud de acceso se señaló como modalidad preferente: "Entrega por Internet en el INFOMEX", y ello ya no es posible, la Procuraduría General de la República deberá entregar la información solicitada, a través del correo electrónico que proporcionó el recurrente, o ponerla a su disposición en un sitio de internet y comunicar a éste último los datos que le permitan acceder a la misma. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del *Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

Toda vez que los documentos en cuestión contienen información confidencial, en términos de la Ley de la materia, **el sujeto obligado procederá a la elaboración de las versiones públicas correspondientes.**

Lo anterior, con fundamento en el artículo 43 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, el cual establece que las unidades administrativas podrán entregar documentos que contengan información clasificada como reservada o confidencial, siempre y cuando los documentos en que conste la misma permitan eliminar las partes o secciones clasificadas. En



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

tales casos, deberán señalarse las partes o secciones clasificadas que fueron eliminadas.

Además, el artículo 41 del Reglamento de la Ley de la materia, puntualiza que el Comité de Información de la dependencia o entidad, deberá dar acceso a las versiones públicas de los expedientes o documentos que contengan información confidencial, en las que se omitan los documentos, las partes o secciones que contengan dicha información, aún en los casos en que no se haya requerido al particular, titular de la información, su consentimiento para que se otorgue, o bien, se obtenga una negativa expresa o tácita del mismo.

Por tanto, el sujeto obligado deberá entregar al recurrente, además de dicha versión pública, la resolución emitida por su Comité de Información, en donde indique las partes o secciones eliminadas, y funde y motive su clasificación, de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 45 de la Ley en la materia y 70, fracciones III y IV, y 72 de su Reglamento.

Cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56, párrafo segundo de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, debido a que la información conteniente partes o secciones que deben ser confidenciales, este Instituto, previa su entrega al recurrente, verificará la versión pública elaborada por la Procuraduría General de la República, a efecto de estar en posibilidad de tener plena certeza del debido acceso a la información solicitada y la adecuada protección de la información clasificada, en términos de lo antes expuesto. Ello, en un término de diez días, a partir de la notificación de esta resolución.

Una vez hecho lo anterior, el sujeto obligado contará con un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la verificación de la versión pública, para entregar la información al particular.

Por lo expuesto y fundado, este Pleno:

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 55, fracción V y 56, fracción III de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, **REVOCAR** la respuesta del sujeto obligado en términos del considerando tercero de la presente resolución.



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 56, párrafo segundo de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, y 91 de su reglamento, se instruye a la Procuraduría General de la República para que en un término no mayor de diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con la instrucción y en el mismo término lo informe a este Instituto; consistente en:

- a) Realice la versión pública de los expedientes de las averiguaciones previas **PGR/FEMOSPP/002/2002** y **PGR/FEMOSPP/011/2002**, relacionadas con los hechos ocurridos el 02 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, mismas que obran inmersas en los expedientes identificados como **SEIDF/CGI/262/2007** y **SEIDF/CGI/260/2007**, por lo tanto, el sujeto obligado deberá localizar en éstos últimos, las documentales que forman parte de las averiguaciones previas **PGR/FEMOSPP/002/2002** y **PGR/FEMOSPP/011/2002** y entregar únicamente las versiones públicas de éstas, en las cuales se consignó por el delito de genocidio a varias personas, incluido el ex presidente Luis Echeverría Álvarez, omitiendo la información confidencial que obrase en ellos.
- b) Entregue al particular la información solicitada, es decir las versiones públicas de los expedientes **PGR/FEMOSPP/002/2002** y **PGR/FEMOSPP/011/2002**, así como la resolución emitida por su Comité de Información, en donde indique las partes o secciones eliminadas, en dichas versiones públicas.

Asimismo, se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de incumplimiento, este Instituto procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 del *Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

TERCERO. Con fundamento en el artículo 86 del *Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, notificar la presente resolución al recurrente, en la dirección señalada para tales efectos y, por la Herramienta de Comunicación, a la Procuraduría General de la República.

CUARTO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que a través de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto, verifique que el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

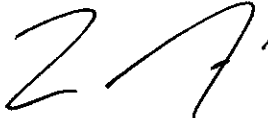
Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora

seguimiento que corresponda, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, fracción XIX; 56, párrafo segundo de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*.

QUINTO. Poner a disposición de la recurrente para su atención el número telefónico 01 800 835 4324 y el correo electrónico vigilancia@inai.org.mx para que comunique a este Instituto sobre cualquier incumplimiento a la presente resolución.

Así, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Ximena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, siendo ponente la primera de los mencionados, en sesión celebrada el 19 de agosto de 2015, ante Yuri Zuckermann Pérez, Coordinador Técnico del Pleno.

Ximena Puente de la Mora
Comisionada Presidenta


Francisco Javier Acuña
Llamas
Comisionado


Areli Cano Guadiana
Comisionada


Oscar Mauricio Guerra
Ford
Comisionado


María Patricia Kurczyn
Villalobos
Comisionada

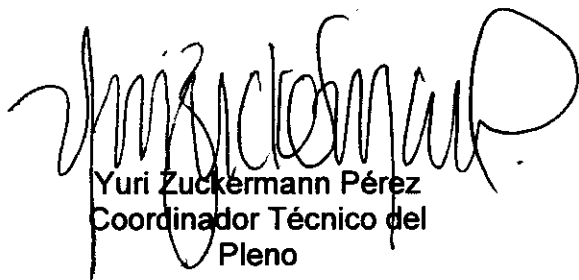

Rosendoevgueni
Monterrey Chepov
Comisionado

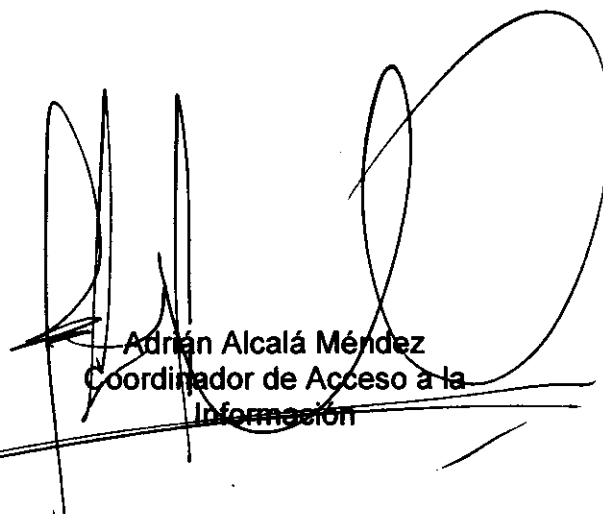

Joel Salas Suárez
Comisionado



Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de
Datos Personales

Número de expediente: RDA 1021/15
Sujeto obligado: Procuraduría General de la
República
Folio: 0001700055815
Comisionada ponente: Ximena Puente de la Mora


Yuri Zuckermann Pérez
Coordinador Técnico del
Pleno


Adrián Alcalá Méndez
Coordinador de Acceso a la
Información

Esta foja corresponde a la resolución del recurso de revisión RDA 1021/15, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el diecinueve de agosto de dos mil quince.